

Programa Fundamental  
de la  
**FEDERACIÓN  
ESTATAL DE  
TRANSPORTES,  
COMUNICACIONES Y  
MAR**  
(Edición provisional)



# Índice

## El tránsito de UGT al nuevo siglo

- I. El sentido del programa fundamental
- II. El siglo XXI y el futuro pacífico de la humanidad
- III. Un sindicato para todos: convivencia y pluralidad
- IV. El valor esencial del trabajo en nuestra sociedad
- V. La globalización y el desarrollo mundial equilibrado
- VI. La naturaleza y la acción medioambiental
- VII. El crecimiento económico y la distribución de la riqueza
- VIII. El estado de bienestar y la calidad de vida
- IX. La construcción social europea
- X. La acción sindical, compromiso ético

## EL TRANSITO DE UGT AL NUEVO SIGLO

El Congreso inaugura la plena inserción de UGT en el siglo XXI. En esa dilatada trayectoria hemos renovado y acumulado experiencia en la organización y defensa de los trabajadores, desarrollando un continuo esfuerzo de innovación en nuestra práctica sindical para ser incisivos en la corrección de los desequilibrios sociales de todo tipo.

En 1888, Pablo Iglesias junto a un reducido grupo de representantes de sociedades obreras tomaron la iniciativa de constituir UGT, un sindicato que inicialmente agrupó y extendió los núcleos organizativos de los trabajadores con una orientación revolucionaria desde la perspectiva de la lucha de clases. Esta posición transformadora resultó decisiva para el progreso de nuestro país, ya que supuso un ariete insustituible. Tras una prologada identidad de más que centenaria, el 38º para remover las viejas estructuras socioeconómicas que eran tan injustas como arcaicas.

Durante un largo periodo histórico, los socialistas (tanto de la UGT como del PSOE) tuvieron que protagonizar enconadas movilizaciones políticas y sindicales con el propósito común de la emancipación de los trabajadores, logrando con esa lucha social abrir paso a la libertad, la democracia y las primeras grandes reformas sociales del siglo XX. La abnegación y amplitud de miras de aquellas gestas sociales enlazan con la generosa tarea multiplicadora desplegada en los millares de Casas del Pueblo, extendidas por toda nuestra geografía, auténtico crisol de una nueva cultura político-sindical de progreso, abierta para todos.

Gracias a todos estos esfuerzos, cuando en 1932 se celebra el 17º Congreso, UGT ya constituía el pilar más importante para la construcción de un modelo de bienestar social en una joven y esperanzadora democracia. El proceso de implantación sindical en todos los sectores y su continua modernización organizativa, había permitido la plena consolidación de UGT, la mayor organización de nuestro país, un sindicato de clase en el más amplio sentido, que agrupaba a los trabajadores manuales e intelectuales, a los obreros junto a los profesionales liberales, en definitiva, a los trabajadores de todo tipo como proclamaba la propia Constitución de la II República.

En 1976, el 30º Congreso inicia una nueva andadura para la normalización democrática, tras la sacrificada lucha contra la dictadura franquista, defendiendo la libertad sindical al servicio de los trabajadores, lo que obligaba a una definición de identidad de cada una de las organizaciones existentes. En aquella clarificación del espacio sindical, UGT, sindicato de clase y orientación socialista, encarnaba los más avanzados valores sociales y europeistas, entronizando en España, en tanto que organización fundadora, a la CES (Confederación Europea de Sindicatos) y la CIOSL (Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres).

En 1988, cuando celebramos nuestro centenario como primer sindicato de España, habíamos fortalecido nuestra propia autonomía ante la acción política. Entonces dimos un paso más para hacer posible el ambicioso objetivo histórico de UGT: un sindicato para todos, construido desde el respeto a la pluralidad ideológica y social de los trabajadores.

Los últimos años del siglo XX hemos seguido profundizando en una política sindical innovadora e integradora, coherente con el proyecto de un sindicato para todos en una realidad cada vez más plural. Un objetivo que, reiteramos, no es nada sencillo, puesto que requiere un esfuerzo de adaptación de nuestras concepciones, actuaciones y expresiones acercándolas a las múltiples necesidades sociales y a las legítimas aspiraciones personales de cada uno.

El acierto sindical en el nuevo siglo estará en desplegar una acción reformadora, con una envergadura y amplitud sin precedentes, que preservando nuestra histórica identidad de sindicato de clase y orientación socialista, y sin perder el más activo compromiso de solidaridad, sepa afrontar los nuevos retos sociales con una perspectiva integradora y equilibrada para todos los trabajadores.

Los sindicalistas debemos entender con rigor la dinámica social de futuro y actuar eficazmente en esa nueva realidad, globalizada y diversa a la vez que profundamente desigual. Para ello, UGT necesita unas bases programáticas para este siglo tan renovadoras y llenas de esperanza, como las que han representado el impulso del sindicalismo revolucionario del siglo XIX y el sindicato de clase y orientación socialista en el siglo XX.

Con el Programa Fundamental pretendemos mantener ese discurso vigoroso y comprometido, centrado en el inagotable potencial de progreso que encierra la cultura del trabajo: el esfuerzo y la aportación de cada uno, la utilidad social para todos y la plena solidaridad con los más desfavorecidos.

## I. EL SENTIDO DEL PROGRAMA FUNDAMENTAL

El reconocimiento de nuestra propia identidad y la transparencia de nuestra conducta, nos animan a explicitar un Programa Fundamental que trascienda al posicionamiento puntual del Sindicato y a las determinaciones que se adoptan en los sucesivos Programas de Acción.

El Sindicato, en su cotidiana defensa de los valores sociales, articula un sinfín de respuestas a situaciones diversas que permiten descubrir y juzgar la naturaleza real de UGT, incluyendo su propia identidad modelada únicamente por la voluntad de los afiliados y caracterizada por la práctica de su comportamiento.

El Programa Fundamental, sin rehuir el juicio social que merezca la conducta sindical diaria, expone con plena transparencia para toda la sociedad el cuadro de valores a partir del cual se justifican y orientan nuestras actuaciones y compromisos como sindicato. El Programa, como ejercicio de soberanía sindical, constituye la base del libre compromiso de cada uno de los afiliados de UGT.

La plasmación de esta identidad del Sindicato junto con las aspiraciones que perseguimos pretenden servir, únicamente, de pautas permanentes de actuación de UGT, sin que suponga un programa a largo plazo, menos aún un programa máximo, irrenunciable y redentorista.

La radicalidad de UGT estará siempre en sus compromisos frente a las injusticias de todo signo y la indeclinable perseverancia en la lucha por un mundo mejor. La vocación reformadora del Sindicato se manifiesta en la paciente actuación en el tiempo, buscando el máximo consenso para la gradualidad de los cambios sociales.

Esa doble vertiente de nuestro hacer explica la trayectoria de UGT en mucho más de un siglo, adaptando nuestros proyectos colectivos a la cambiante realidad política, económica y social. En general, creemos que el balance de toda nuestra actuación arroja un saldo claramente positivo, puesto que hemos participado activamente en una dinámica de progreso, cuya configuración actual en parte ha sido fruto de nuestro propio protagonismo social.

La histórica condición de inferioridad económica, política y jurídica de los trabajadores ha justificado, desde el nacimiento de UGT, la necesidad de una organización que ordene y potencie una respuesta democrática de vocación igualitaria, en base a un proyecto de progreso social, frente a una realidad social marcada por profundas desigualdades que no pueden ser aceptadas.

La eficacia de la acción colectiva de los trabajadores, gracias a la dimensión organizativa del Sindicato, ha permitido revalorizar en términos económicos, sociales y culturales la función del trabajo y dignificar la persona del trabajador en nuestra sociedad, aunque todavía estemos lejos de lograr la perseguida equiparación social, si nos comparamos con otros países de nuestro entorno europeo.

Partiendo de una secular situación de atraso social en España, UGT ha defendido a lo largo de mucho más de un siglo de existencia, con igual ahínco y siempre con sentido del momento histórico, los valores de la libertad, la democracia, la modernización económica y la justicia social que estaban prácticamente ausentes de la realidad española. La perseverancia ugetista en esos valores socialistas supuso una esperanzadora cuña de progreso para sustentar nuestro proyecto sindical, sin sitio para el desaliento en coyunturas adversas.

Unos principios de progreso social que hoy van ganando espacio en la sociedad, hasta el extremo de convertirse en valores comunes de un amplísimo espectro de la ciudadanía, aunque un siglo atrás no encontrarán muchos más anclajes para su defensa social que los que proporcionaba el sindicalismo de clase de orientación socialista.

En España, los grandes cambios culturales y políticos acaecidos en las últimas décadas, junto a las considerables mejoras sociales alcanzadas, han sido fruto del empeño democrático y pacífico de la inmensa mayoría de la sociedad, con la propia y activa contribución de UGT. En todas las encrucijadas históricas hemos defendido posiciones sociales avanzadas que hoy se identifican, fácilmente, con los valores constitucionales plasmados en los derechos fundamentales de nuestra Carta Magna.

Por tanto, en la actualidad, la mayor parte de las aspiraciones sociales que enlazan con los valores socialistas de nuestra tradición sindical se han convertido en objetivos sociales ampliamente aceptados o incluso en derechos reconocidos, aunque en uno y otro caso están todavía lejos de ser una realidad

práctica que proteja a todos, especialmente a los más desfavorecidos, a los que las desigualdades de nuestra sociedad laceran injustamente.

Pero en todo este proceso de transformaciones sociales, UGT no sólo ha sido sujeto impulsor de las mismas, sino que al mismo tiempo ha permitido cambiar al propio Sindicato en base a nuevas exigencias, siendo receptor vivo de novedosos valores, que progresivamente obligan a reformular el papel de los ugetistas en cada uno de los Programas de Acción.

Ahora bien, la actualización de nuestro proyecto que plasmamos en los Congresos sólo tiene sentido si permite mantener el significado de nuestro compromiso, lo que en buena medida recoge este Programa Fundamental. Se trata de hacer posible la ecuación dinámica “cambiar sin traicionar” y, si lo consiguiéramos, este propósito sería, sin duda, nuestro principal activo ante la sociedad.

## II. EL SIGLO XXI Y EL FUTURO PACÍFICO DE LA HUMANIDAD

Este nuevo siglo hace por fin realidad la conciencia de universalidad, la presencia consciente en un mundo global. Ahora bien, los efectos derivados de esta existencia globalizada, en buena medida, están todavía por definir: o bien podremos acentuar las posibilidades de una convivencia pacífica y enriquecedora, o por el contrario, cabe deslizarse, más y más, por la senda de los conflictos destructivos que pueden degenerar en violencia.

Hay una tarea “planetaria” a la que la humanidad está convocada como hacedora de un soñado escenario mundial de paz, justicia y desarme y donde UGT, en su modesta dimensión, encuentra su propio ámbito de compromisos solidarios con el progreso pacífico de todos.

Nuestro Sindicato rechaza de forma explícita cualquier tipo de violencia como método de acción política o social y se compromete a trabajar en favor de la paz, promoviendo el desarrollo equilibrado y los derechos democráticos en todo el mundo. En este sentido, es fundamental también promover la educación para la paz, recuperando y fomentando los valores de libertad y paz no sólo como grandes declaraciones sino en los comportamientos cotidianos, sustentando el entendimiento de los pueblos y de un orden mundial basado en la justicia.

Tenemos ante nosotros un horizonte de oportunidades como jamás habíamos soñado para el desarrollo económico y social. La nueva potencialidad productiva, que se propaga en una auténtica Sociedad de la Información, ofrece ingentes posibilidades de crecimientos respetuosos con el medio ambiente. Los cambios tecnológicos, especialmente intensos en la nueva economía y las más dinámicas formas de organización del trabajo apoyadas en la gestión del conocimiento, generan, con sentido de futuro, riqueza suficiente para la satisfacción de todas las necesidades humanas básicas.

Pero no podemos minimizar los desafíos con que tropezamos, a pesar de la revolución tecnológica, en un mundo tan desigual, con bolsas de pobreza (en algunas partes auténticas hambrunas) de escala gigantesca, con desbordadas tensiones en extensas zonas geográficas. Incluso dentro de los países industrializados, las ofensivas de desregulación social están resquebrajando la vieja cohesión de nuestras sociedades, con desempleos masivos y precariedad laboral. Además, la degradación ambiental ha pasado a un primer plano, señalando incluso el agotamiento de ciertos recursos naturales.

Por eso, a la hora de afrontar los retos del siglo XXI, pesa el trasfondo social adverso que marcan los intereses económicos y financieros de signo más egoísta, instalados en esa profunda desigualdad de la que resultan beneficiarios. Para dar amparo a tales conductas no se puede aceptar que proclamen la libertad económica, cuando de hecho se socavan los equilibrios sociales de los propios mercados y se desincentiva la vida productiva a medio plazo con la multiplicación, día a día, de enormes operaciones especulativas.

El nuevo paradigma que trata de abrirse paso, con visos de pensamiento único, responde a una base doctrinal de corte neoliberal en su concepción más extrema. Un esquema ideológico que directamente choca con el progreso social relativamente equilibrado que disfrutaron algunas sociedades europeas.

Se pretende dismantelar el modelo social europeo fruto del compromiso político tras la Segunda Guerra Mundial que, apoyándose en amplios consensos sociales y sindicatos fuertes, ha conseguido unas cotas de bienestar sin perder los valores referenciales de la igualdad y la solidaridad, verdaderos catalizadores en la actuación sobre las bolsas de marginación.

El nuevo neoliberalismo, con vocación económica en origen, también se expande en otros campos y termina plasmando sus pautas culturales postmodernas, ya sean la preeminencia del individualismo, el absentismo en la participación cívica, la sumisión al poder del dinero, la disminución de lo público frente a lo privado y, sobre todo, la legitimación de graves desigualdades sociales como una merecida expresión del éxito para pocos y responsabilidad en su propio fracaso para la mayoría, acompañándola con las irritantes condenas a las capas más desfavorecidas.

En la construcción de un futuro basado en la justicia y la igualdad, será imprescindible restaurar el tejido social que el neoliberalismo está desgarrando, así como poner en cuestión una concepción unidimensional de la modernidad, derivada de la respuesta mecánica de cualquier crecimiento económico.

Pero el primer y gran desafío de la humanidad está en erradicar la pobreza, y su prueba de fuego será la eliminación del hambre en el mundo: un indudable imperativo ético, pero también una posibilidad práctica.

Naciones Unidas señala que la humanidad dispone de recursos suficientes para alimentar a una población doble de la existente y que la erradicación de la pobreza en el mundo sólo costaría el esfuerzo sostenido del 1% de la riqueza de las naciones desarrolladas.

Además, las desigualdades económicas a las que nos enfrentamos, en su agudización, están atravesadas por diferencias étnicas y culturales en grandes áreas continentales, aparentando una preocupante realidad transversal de confrontación entre civilizaciones que, de aceptarla como real, haría muy difícil la convivencia pacífica en el mundo.

Una de las manifestaciones sociales de esta inquietante situación, de la que tenemos cotidiana noticia sindical, está en la falta de una adecuada respuesta tanto a los flujos migratorios actuales, como a las brechas sociales y laborales que separan a inmigrantes y autóctonos en el mundo occidental. Hechos que nos invitan a una diligente actuación en aras a eliminar esta gran barrera de la humanidad.

La afirmación de la igualdad radical de los derechos de todos los hombres y mujeres del género humano tiene que traducirse en una clara supresión de las fronteras políticas, raciales, culturales, ideológicas y religiosas, sin cuya consecución quepa hablar de una duradera convivencia pacífica y plural.

En el caso de España, UGT va a seguir defendiendo con toda contundencia el inalienable derecho a la vida, frente a todo tipo de terrorismo. La defensa de la libertad y los valores democráticos exige que hagamos frente, sin concesiones, a aquellos que utilizan el terror para imponer sus ideas.

Desde UGT vamos a seguir denunciando, también, a quienes con actitudes racistas, xenófobas y, en definitiva, totalitarias, alientan y protegen a los terroristas e impiden la convivencia democrática y atentan contra el modelo social que defendemos.

La utopía posible del nuevo siglo estará en la constitución de sociedades democráticas, prósperas y multiétnicas, resultado de una progresiva interpenetración social, a la que tanto pueden contribuir los sindicatos. Un ideal por el que merece la pena trabajar, frente a un siniestro horizonte teorizado (y que algunos se empeñan en hacer realidad) como un choque entre civilizaciones, entre submundos en creciente tensión. En este terreno, el sindicato debe ser el instrumento privilegiado de difusión de los valores fundamentales, el trabajo y la solidaridad, para conseguir hacer de la utopía una acción colectiva socialmente transformadora.

La validación del nuevo modelo social tendrá múltiples ámbitos para verificar su virtualidad, pero el más importante (aunque a veces sea el más alejado de nuestra realidad inmediata eurocéntrica) surgirá de contrastar sus resultados frente a la pobreza y el racismo. Este desafío tiene tanto calado que incluso ha llegado a los foros económicos mundiales defensores del neoliberalismo, abriendo el debate sobre la búsqueda de valores y principios comunes, que den una faceta humana al mercado mundial y aborden esa fractura universal.

El éxito de los proyectos reformadores en el siglo XXI estará en saber encarar las nuevas situaciones respetando mutuamente las diferencias y sin dogmatismos, favoreciendo, antes que nada, la apertura de miras y la revisión crítica de ciertos valores que nos anclan sin sentido de futuro, bien porque son regresivos o simplemente porque están desfasados. En particular, las señas de identidad de nuestro proyecto sindical se deben asentar, con perspectiva solidaria, en los valores de las democracias avanzadas y las economías más eficientes, eso sí, evitando que la dinámica de la economía de mercado conduzca a una sociedad de mercado.

En esa economía social de mercado adquiere una importancia crucial que haya más y mejor sindicato, de tal modo que sepa expresar en su ámbito y defender con realismo la igualdad, la justicia, la cohesión social y el respeto por el medio ambiente. Para el Sindicato, la defensa de estos valores sirve para establecer un compromiso claro ante los desafíos del nuevo siglo y cooperar junto con tantas otras instituciones y organizaciones en un futuro solidario para la humanidad.

Pero nuestra tarea preferente, y socialmente insustituible, nos obliga a centrar nuestros esfuerzos en la articulación de un proyecto específicamente sindical de amplia base social, dirigido a la defensa del derecho de los ciudadanos a su propio proyecto de vida, entre cuyas condiciones de realización se encuentra el pleno empleo, la dignificación del trabajo en todos sus aspectos y el reparto equitativo entre hombres y mujeres de las tareas profesionales y familiares.

### III. UN SINDICATO PARA TODOS: CONVIVENCIA Y PLURALIDAD

UGT es una organización democrática de trabajadores, construida desde la solidaridad, que busca la presencia activa de todo tipo de colectivos en su seno y persigue la promoción armónica de los intereses diversos del mundo del trabajo.

Por elemental sentido democrático, las premisas de actuación del Sindicato se basan tanto en la amplitud de la afiliación, como en una suficiente y creciente representación laboral para dar legitimidad a la acción sindical y defender con eficacia nuestro proyecto.

La dimensión organizativa también ofrece un singular valor para los ugetistas. El hecho asociativo, en sí mismo, no puede responder a una concepción pasiva de la afiliación como mera adhesión al Sindicato, sino que debe ofrecer un marco rigurosamente democrático para la participación individual del afiliado en las estructuras sindicales que él mismo conforma. El Sindicato tiene que generar un auténtico espacio de convivencia personal, que trasciende al alcance instrumental de la organización, en la defensa de los trabajadores a través de la acción sindical.

Un activo proceso de afiliación sindical, una amplia representación de colectivos sociales y una convivencia interna respetuosa con la identidad de cada uno de los afiliados (étnica, ideológica, cultural, lingüística, religiosa o sexual), son los tres pilares para construir un sindicato plural, de todos y para todos.

En este marco nuestra acción no se reduce a la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores en las relaciones laborales. Debemos fomentar además la participación ciudadana y aunar esfuerzos con diferentes agentes y movimientos ciudadanos en torno a causas comunes.

Los anteriores pilares organizativos necesitan un nexo de unión, basado en una exigente política de comunicación que, con el compromiso de todos y el despliegue de las nuevas tecnologías, permita la plena transparencia interna y externa de UGT. Información interna, que haga posible la participación consciente de los afiliados apoyándose en toda la pirámide informativa, desde el contacto personal a las redes de intranet e internet. Comunicación externa, que puntualmente traslade a la sociedad nuestros proyectos y posicionamientos, a través de los profesionales de los medios, y también abierta a todos los ciudadanos con todas las herramientas posibles, entre otras, el portal de UGT, sometiendo la conducta de la Organización a la continua valoración social.

Para el acierto sindical resulta imprescindible una permanente prospectiva sociolaboral de la sociedad cambiante y una aproximación positiva a la pluralidad ideológica de los trabajadores con pleno respeto a los valores democráticos. Esto es, un mejor entendimiento del presente y futuro del mundo del trabajo y, al mismo tiempo, una adecuada consideración e integración de las diferentes concepciones de los afiliados.

La nueva realidad social, con pluralidad de formas e irrupción de grupos emergentes, define un panorama diametralmente alejado de algunas simplificaciones que pretenden reducir la categoría de los trabajadores a una clase social homogénea, receptora de respuestas uniformes. Por el contrario, se ha producido una diversificación, incluso disgregación de intereses, que dota de una enorme complejidad el panorama laboral de nuestro entorno.

Estamos ante un fenómeno ambivalente en la evolución sociológica. Por un lado, la diversidad en el mundo del trabajo expresa una mayor riqueza laboral en una compleja realidad productiva. Sin embargo, por otro lado, la disgregación social en la estratificación del empleo refleja desestructuración social, que sólo puede resolverse con un esfuerzo de cohesión para el que se necesita “más y mejor” sindicato.

Los trabajadores actualmente (menos aún en el futuro) ya no responden a un rostro tipo, ni siquiera de carácter dominante (como en el pasado pudo ser el perfil obrero-masculino-industrial) con quien acomodar el grueso de la acción sindical. Muy al contrario, en la actualidad, la pluralidad de perfiles laborales es tan variada, que sólo recurriendo a una estrategia adecuada se puede evitar la tentación de una respuesta basada en el corporativismo o en la atomización sindical.

Con sentido autocrítico, igualmente, hay que evitar una forzada búsqueda de un inmediato denominador común para abordar problemáticas distintas de los diferentes colectivos, aunque algunas veces tratemos de arropar esta pretensión en un engañoso principio de solidaridad.

A estos efectos, el propósito de un sindicato para todos dificulta, aunque no impide, los peligros anteriores. Desde luego, la mejor garantía para un sindicalismo equilibrado y equilibrador estará siempre en la amplitud y la pluralidad en la afiliación, así como en la viveza de la participación democrática interna.

UGT debe multiplicar sus esfuerzos para reunir en su seno, en una convivencia enriquecedora, la totalidad del arco social: mujeres y hombres, mayores y jóvenes, ocupados y desempleados. La acción sindical debe dar respuesta en la totalidad de los sectores a todo tipo de trabajadores, manuales e intelectuales, asalariados y autónomos, activos y jubilados, autóctonos e inmigrantes.

Pero el Sindicato es mucho más que un instrumento para la acción. La dimensión asociativa multiplica el valor convivencial de la Organización, puesto que tiene que respetar la pluralidad y servir de escuela democrática en el quehacer social, proporcionando educación cívica y laboral, generando pautas culturales y estableciendo reglas de gobierno interno aceptadas por todos. En este sentido, la formación sindical de los afiliados y los representantes de los trabajadores debe constituir un empeño permanente del Sindicato.

El Sindicato permite reafirmar la igualdad social que la vida laboral ordinaria puede, en parte, sacrificar en aras de la jerarquía productiva. La vida sindical juega en este sentido de contrapunto social en la realidad de la empresa, facilitando la cooperación y reequilibrando situaciones frente a determinadas conductas gerenciales, a veces cargadas de tentaciones autoritarias y discriminatorias. Las Secciones Sindicales son la mejor herramienta para combatir las desde el mismo centro de trabajo.

El proyecto de un sindicato para todos no está guiado por ningún propósito de exclusión sindical sino que pretende enfatizar la apertura social y la pluralidad interna, que debe presidir nuestra Organización. Esa escuela de convivencia facilita, igualmente, el entendimiento de la pluralidad externa, la existencia de otros sindicatos en nuestro país que también expresan, acordes con sus propias culturas y trayectorias sindicales, los intereses de los trabajadores.

La acción sindical, tanto para la riqueza de las propuestas como para la eficacia de los resultados, debe buscar la máxima cooperación entre sindicatos, articulando la participación de la mayoría de los trabajadores. Al mismo tiempo, desde el respeto a la diversidad del hecho sindical, cabe avanzar sobre iniciativas comunes de muy diverso orden, en un camino abierto de nuevos proyectos sindicales, fuera de toda predeterminación, que bien pudieran ordenar mejor los diferentes niveles de cooperación o incluso establecer vías de progresiva integración organizativa.

UGT forma parte de la sociedad y vertebrada una parte importante de ella, el mundo del trabajo. UGT constituye una fuerza social progresista que aspira a una transformación profunda y democrática de la realidad social, reivindicando soluciones a problemas de carácter general y de gran calado que interesan a la ciudadanía como tal y a la sociedad en su conjunto.

La cohesión en el seno de la clase trabajadora y la lucha contra las desigualdades suponen necesariamente el reforzamiento de la solidaridad hacia los trabajadores en paro, así como con todos aquellos que se ven marginados y excluidos del sistema.

Nuestra acción sindical debe también alcanzar a los “forzosos autónomos”, a los trabajadores a domicilio y su variante del teletrabajo, jubilados y pensionistas, los pre-jubilados por distintos motivos, pequeños autónomos, colaboradores habituales de empresas, que realizan una labor de asalariados, aunque no figuren en la nómina y jóvenes cuya carencia de trabajo o empleo precario impiden su integración en la sociedad.

Defendemos la igualdad real entre hombres y mujeres, propugnando una distribución equitativa de las tareas, tanto laborales como extralaborales y propugnamos una decidida política de democracia de género.

UGT, considera, desde su autonomía sindical irrenunciable, que el fortalecimiento de opciones sociales y políticas propuestas es imprescindible para avanzar en la consecución del modelo social que propugnamos y por ello es necesaria nuestra contribución al entendimiento de las fuerzas políticas y sociales con las que compartimos objetivos y valores contribuyendo también a la plena recuperación del sentido crítico y la capacidad de análisis.

El sindicalismo que practicamos tiene una larga trayectoria y gran experiencia en combinar la negociación y presión para conseguir sus demandas. UGT ha desarrollado una importante capacidad de respuesta que es necesario seguir fortaleciendo y mejorando. Y ambas características, la estrategia de presión y negociación y la capacidad propositiva, son esenciales para un sindicato actual que pretende alterar sustancialmente la correlación de fuerzas existente en favor de los trabajadores.

## **IV. EL VALOR ESENCIAL DEL TRABAJO EN NUESTRA SOCIEDAD**

El derecho al trabajo y la dignificación del empleo son los objetivos centrales de toda política sindical. Nuestras sociedades se asientan en la cultura del trabajo sin que en nuestro horizonte generacional quepa vislumbrar alternativas a este inexorable armazón social.

De ahí el valor esencial del trabajo y la capital importancia de establecer garantías en cuanto al reconocimiento del derecho y mecanismos de acceso para su consecución, piezas sin las cuales se romperían los equilibrios básicos de nuestra sociedad. En definitiva, la posibilidad de generar empleo para todos, el objetivo del pleno empleo, es una condición imprescindible para la cohesión en nuestro modelo social.

Sin embargo, algunas ofensivas neoliberales pretenden degradar el trabajo (con el objetivo de reducir el coste del factor) en la escala de valores sociales. Para ello, de modo más o menos silencioso, se abandona el pleno empleo como objetivo social compartido. Esa renuncia se traduce en la pérdida de la centralidad del empleo por parte de los poderes públicos y en una responsabilidad social más laxa por parte de las empresas en sus políticas de reducción de empleo.

Fruto del progreso social, hemos conseguido incorporar la exigencia de evaluación del impacto ambiental en los proyectos por miedo a causar daños graves a la naturaleza. Cuando menos, por elemental paralelismo, deberíamos exigir el más riguroso análisis del impacto social ante las acciones de despidos masivos que dañan gravemente a la sociedad.

No podemos olvidar tampoco que el empleo es la base del modelo social europeo: las garantías básicas, la protección social, la integración, parten de la concepción de una sociedad donde todas las personas tienen derecho y acceso a un empleo. De hecho, el propio concepto de ciudadanía en la práctica está fuertemente vinculado al trabajo, ya que muchos de los derechos sociales y ciudadanos derivan de la existencia de relación laboral. En muchos casos la pérdida de un empleo o la imposibilidad de acceder al mismo traen consigo la pérdida de otros derechos además de los laborales.

### **1. La radical dignidad del trabajo**

La dignidad del trabajo y su función integradora en la sociedad exigen garantizar la calidad del empleo, basada en la determinación de unos mínimos sociales para calificar su valor en aspectos tales como la variedad, la responsabilidad, la seguridad, la dedicación y la distribución del producto social.

Cada uno de los valores anteriores sobrepasan la simple caracterización de un derecho al empleo, para establecer el cuadro de los derechos laborales que determinan la naturaleza social y jurídica del trabajo, como la consecución de uno de los más importantes resultados históricos del sindicalismo. Sin duda, la evolución del trabajo y su tipología están indisolublemente unidas al movimiento sindical.

La criba histórica de dignificación ha obligado a los sindicatos a revisar con exigencia los aspectos más lacerantes del trabajo: el puro esfuerzo físico, las tareas estrictamente repetitivas, la supeditación ciega a una actividad, la ausencia de toda responsabilidad, la insalubridad y los riesgos para la salud, las jornadas excesivas, la eventualidad exacerbada y los salarios ínfimos, apenas de subsistencia.

Trabajar no puede significar sólo asegurar la existencia, sino que su obligada cualificación debe comportar realización de la persona y participación en la vida social. En definitiva, el trabajo no puede ser en ningún caso una fuente de marginación social, muy al contrario, debe ser la mejor forma de garantizar la función integradora en una sociedad basada en la cultura del trabajo.

### **2. El trabajo y la vida familiar**

Bien es verdad que el trabajo es el motor de todo el bienestar social y la calidad de vida, pero no sólo el trabajo remunerado contribuye a la prosperidad. La labor educacional hacia los hijos, las tareas domésticas en el hogar, el apoyo asistencial y el compromiso de voluntariado, son manifestaciones generalizadas y continuas del trabajo, todas ellas de una incalculable utilidad social, aunque carentes

de remuneración monetaria y, por ello, sujetas, en buena medida, a una desconsideración de su valor económico.

En el centro de esta infravaloración social se encuentran las mujeres, como los sujetos que prácticamente soportan la totalidad del trabajo no remunerado. Esa profunda disimetría social, base de la división sexista de funciones en la sociedad, a su vez condiciona el propio reparto del trabajo profesional remunerado entre hombres y mujeres. La feminización de la pobreza en las familias monoparentales y la irrupción de trabajos remunerados “femeninos”, de carácter precario, son también rasgos de esta preocupante desigualdad social.

El reparto equilibrado del trabajo profesional y las tareas domésticas entre hombres y mujeres, y la necesaria compatibilidad real entre trabajo y vida familiar, son retos inmediatos de la acción sindical y base para una transformación social sin precedentes en la historia reciente, pues significan una obligada alternativa al sacrificio milenario de la mitad de la humanidad.

### **3. La reducción de la jornada y el reparto del trabajo**

La política de reducción de la jornada laboral (no sólo la que nominalmente fija la norma sino también la que realmente hacen los trabajadores) sigue teniendo en nuestra actual situación (que supera al promedio europeo) toda su vigencia y, al mismo tiempo, ofrece la oportunidad de coadyuvar al reparto del trabajo en una situación de desempleo masivo.

Por eso, la acción sindical debe dirigirse hacia la consecución de esfuerzos adicionales en la vía del aumento del empleo, como consecuencia de la reducción de la jornada laboral, porque mientras la cantidad de trabajo viene determinada por las condiciones tecnológicas y económicas de producción en cada momento, el empleo, en cambio, es el resultado de la manera en que socialmente se organiza el trabajo.

No se debe confundir el reparto del trabajo y el reparto del empleo. Cuando el reparto del trabajo adopta la modalidad de reparto del empleo a través de reducciones proporcionales de la jornada de trabajo y los salarios, lo que se está proponiendo es una mera distribución de la renta entre los asalariados, la “solidaridad intraclase”.

Seguiremos avanzando en el proceso de reducción de jornada a partir de las 35 horas semanales en el sentido de que dicha reducción sea universal, para lo que es necesario un soporte legislativo.

El aumento de la productividad y la prosperidad económica creciente, no sólo debe significar una mejora retributiva para los trabajadores, sino también una reducción de la duración individual del trabajo y, por consiguiente, un aumento del tiempo libre.

Un acortamiento de la jornada diaria y un adicional día de descanso a la semana (que se añadiría a la cada vez más extendida fórmula del bidescanso semanal) permitirá a los trabajadores abrir nuevas esferas de actividades libres y creativas, amén de atender mejor su vida y responsabilidad familiar. Por otra parte, los días libres de la semana deberían responder tanto al principio de descanso como a su transformación en festivo, esto es, día de encuentro en los entornos familiares y sociales. Un propósito ambicioso y complejo en la concepción de los ciclos semanales, de tal modo que la gestión de los turnos permita generalizar la simultaneidad de algunos descansos.

### **4. El futuro del trabajo y el cambio en la empresa**

Las transformaciones en la caracterización del trabajo que en la nueva sociedad cada vez más tienden a reforzar el valor y centralidad de éste, sobrepasan a las decisiones puntuales en la vida interna de las empresas. De hecho, obedecen a cambios estructurales en el conjunto de la economía e igualmente responden a las nuevas exigencias sociales en la provisión de bienes y servicios.

Los nuevos métodos de organización del trabajo, la flexibilidad en los esquemas productivos, la versatilidad en la prestación de servicios, el valor determinante de los sistemas de calidad y las nuevas herramientas de gestión, han revolucionado las estructuras de las empresas. En el momento del uso masivo de las nuevas tecnologías la tradicional dialéctica hombre/máquina prácticamente desaparece y se tiende a promocionar el capital humano de los proyectos empresariales más dinámicos.

Las nuevas claves del éxito de las empresas residen, por encima de cualquier otro input, en la calidad e integración de su equipo humano. Adaptabilidad, cooperación, cualificación y gestión del conocimiento constituyen, entre otros, los factores críticos de los trabajadores en las profesiones de futuro.

Por otra parte, la tecnología de comunicación y la creciente interconexión de los puestos de trabajo, resalta el valor añadido de cada aportación individual a la vez que lo integra en una red productiva, que recorre todas las líneas de trabajo o incluso abre la posibilidad del teletrabajo.

Las empresas con las plantillas masivas de trabajadores fueron la fórmula más extendida del capitalismo industrial y el caldo de cultivo para el nacimiento del sindicalismo. Hoy las empresas se organizan con fórmulas muy complejas, potenciando el valor de la capacitación y siendo excepción las empresas que cuentan con una concentración masiva de trabajadores. Por eso, el sindicato cometería un gravísimo error si recibiera a los trabajadores como un todo indiferenciado y pretendiera atender nuevas situaciones con viejos esquemas.

El trabajador, en el nuevo tejido productivo, deja de ser una mera pieza de un colectivo para acrecentar su individualidad, reforzando su valor personal como expresión esencial de las nuevas posibilidades de humanizar el trabajo, permitiendo que un nuevo sindicalismo multiplique favorablemente la velocidad de estos cambios sociales.

La renovación de la vida productiva debería ofrecer nuevas oportunidades para organizar el trabajo de forma más variada y participativa y aumentará la responsabilidad personal en el proceso productivo, periclitando los viejos esquemas jerárquicos.

## **5. La precariedad laboral, ineficiencia y dualidad social**

Pero no seamos ingenuos, puesto que junto a este núcleo dinámico de los nuevos modelos productivos que obligan a disponer de un proyecto empresarial participativo, se dan cita, en una periferia económica, una multitud de empresas ineficientes que completan el modelo dual (núcleo/periferia) dentro de frecuentes estrategias de segregación de actividades que se apoyan en los dos esquemas productivos.

En este modelo, la segmentación laboral es el resultado de una organización de las empresas que se basa en dos grupos bien diferenciados de los trabajadores: un núcleo estable, protegido y con buenas remuneraciones, y una periferia inestable, precaria y con bajos salarios. En su formulación más extrema, lleva a compaginar retribuciones multimillonarias de los máximos ejecutivos de las multinacionales con la existencia (en sus empresas auxiliares, geográficamente dispersas) de la nueva categoría social: los trabajadores con contratos precarios.

Las empresas periféricas reaccionan con pasividad frente a la pérdida de su ventaja competitiva, degradando las condiciones laborales como una vía cómoda y regresiva de compensación ante la falta de productividad y la baja calidad de sus productos y servicios.

Estas empresas son las empleadoras del trabajo precario (definido por la inestabilidad contractual, los bajos salarios y los riesgos laborales) en los países desarrollados. Las condiciones laborales todavía son más adversas en la actividad infraempresarial que anida en la dualidad económica (junto a un núcleo pequeño de empresas eficientes) de las áreas continentales en vías de desarrollo.

Asimismo, la utilización de la legislación laboral como instrumento privilegiado para llevar a cabo políticas de ajuste, flaco favor supone sobre la calidad del trabajo, tendiendo a su precarización y, en consecuencia, a la siniestralidad.

Por otro lado, dichas políticas laborales de degradación contractual afectan de manera muy notable a los jóvenes que ven cómo el recurso de los contratos inestables terminan por inducir nuevas pautas culturales. Los problemas de los jóvenes se ven agravados por la situación de incertidumbre en el futuro inmediato, generada por la dificultad de establecer proyectos de vida estables y con proyección; el compromiso puntual; y la degradación del valor de la formación.

La lucha contra la precariedad en el empleo, además de perseguir un evidente objetivo de dignificación del trabajo, constituye una ariete decisivo contra la ineficiencia productiva, los accidentes laborales y

la pereza innovadora en las empresas. Por eso, la precariedad en el empleo es el mayor problema al que se enfrenta la acción sindical presente.

La correlación entre la exacerbación de la temporalidad (como precariedad contractual) y la siniestralidad laboral es tan alta, que lleva a España a estar a la cabeza europea de las tasas que miden ambas realidades. Por eso, en la prevención de riesgos laborales la acción sindical debe actuar atacando el problema desde su raíz, que se encuentra en la degradación de las condiciones laborales.

La precariedad es la condición necesaria de la dualidad económica y su resultado más visible es la dualidad social. Un fenómeno de inestabilidad contractual y desempleo que las políticas de coberturas sociales, a posteriori, siempre resultan insuficientes a la hora de reparar tamaña degradación.

Los riesgos del paro y la precariedad afectan a todos los trabajadores y al conjunto de la sociedad y son un problema de todos, afectando en primer lugar a los trabajadores que se encuentran en esa situación y también al resto de trabajadores, puesto que provocan además un deterioro de las condiciones de trabajo y la reducción de los derechos laborales.

Estas situaciones favorecen la individualización de las relaciones laborales, creando enormes dificultades para la sindicalización, lo que supone un mayor debilitamiento para la clase trabajadora en la correlación de fuerzas, y por tanto la ruptura de la solidaridad y de lo colectivo.

Las consecuencias personales derivadas de la situación de paro y rotación laboral se transforman en precariedad económica, aislamiento social, inseguridad personal y fragilización de las familias y pérdida de derechos de todo tipo.

La situación de los jóvenes trabajadores, de las mujeres que siguen padeciendo una fuerte discriminación, de los trabajadores inmigrantes, de los mayores de 45 años que después de toda una vida de trabajo carecen de expectativas de empleo con gravísimas consecuencias, están configurando una sociedad fragmentada que representa lo contrario al modelo social que defendemos.

Otra manifestación de esa dualidad socioeconómica es la economía sumergida, como práctica empresarial de reducción de costes por incumplimiento de todas las obligaciones fiscales y sociales. Una situación que genera competencia desleal y fuerza la degradación de la economía formal y con la que no cabe permisividad social.

El secular atraso económico y social vivido en nuestro país permitió la instauración de un tejido industrial escasamente competitivo, que tras la integración en la UE supuso la renovación profunda del sistema productivo, utilizándose la vía de los bajos costes sociales para alcanzar cotas de competitividad aceptables.

Por eso estas condiciones de precariedad en nuestro mercado de trabajo no son un fenómeno pasajero, tienen una sólida base estructural apoyada en políticas laborales de degradación contractual que afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables, mujeres, jóvenes, trabajadores inmigrantes y personas en riesgo de exclusión social.

## **6. El derecho a la seguridad y salud en el trabajo**

La relación laboral y las relaciones colectivas de trabajo requieren de la garantía de la salud laboral de quien realiza el trabajo, pues sólo mediante la mejora de las condiciones de trabajo se refuerza la eficiencia del trabajo y su propia dignidad.

La calidad de vida del trabajador se fundamenta, en gran parte, en la garantía que el Estado y la empresa presten a la salud laboral de los trabajadores, con pleno respeto a las normas de prevención de riesgos laborales. No obstante, el tratamiento de la mejora de las actuales condiciones de seguridad y salud en el trabajo es un reto al que se debe enfrentar la acción sindical.

La correlación entre la exacerbación de la temporalidad (como precariedad contractual) y la siniestralidad laboral es tan alta que lleva a España a estar a la cabeza europea de las tasas que miden ambas realidades. Por eso, en la prevención de riesgos laborales la acción sindical debe actuar atacando el problema desde su raíz, que se encuentra en la degradación de las condiciones laborales.

En este sentido, cabe aumentar las actuaciones de control del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores a todos los trabajadores, sin distinción de su tipo de relación laboral, tamaño o sector de su empresa.

Por otra parte, los factores psicosociales y su incidencia en la aparición y desarrollo de alteraciones psicológicas y somáticas tienen gran influencia en la salud y bienestar de los trabajadores. La organización del trabajo y las relaciones laborales que conlleva han de ser contempladas por el sindicato también desde este enfoque.

## **7. La inserción laboral de los jóvenes**

La difícil inserción laboral de los jóvenes deriva tanto de los cambios sociológicos en la realidad juvenil como de la degradación de las condiciones de acceso en el mundo del trabajo, sobre las que los sindicatos tenemos que incidir.

Por una parte, el concepto de juventud está sujeto a transformaciones de calado por razones demográficas y culturales, que redefinen y alargan el período de transición que lleva al joven a construir su propio ámbito personal, con plena adquisición de derechos y responsabilidades.

Por otra parte, los parámetros de acceso para la incorporación de los jóvenes a sus primeros empleos son fuentes de desigualdad que se manifiesta en una progresiva precariedad laboral, que lejos de corregirse, algunas políticas tienen la tentación de convalidar con la aplicación de una legislación laboral especial de carácter juvenil.

Los “ritos de paso” juveniles hacia la inserción laboral, adquieren una más que problemática trascendencia, cuando la finalización del ciclo formativo no engarza con una adecuada incorporación al mercado de trabajo. Así, a las generales incertidumbres de un mundo en permanente cambio, se añaden desempleo juvenil masivo sin prestación de cobertura, precariedad en sus posibles empleos y, en todo caso, inestabilidad laboral.

La transición hacia el mundo del trabajo se dificulta con dilaciones y barreras que los jóvenes tratan de franquear alargando el período formativo o buscando actividades laborales puntuales. En definitiva, creando un estado de situación que conduce a una generación de ciudadanos, condenados a unas condiciones de extrema precariedad que impide a los jóvenes conseguir la autonomía (económica, social y personal) que define su entrada a la etapa adulta.

La adecuada inserción laboral de los jóvenes está en la calidad y estabilidad de los primeros empleos, lo que no resta posibilidades a una cierta especificidad en una parte de esos puestos de trabajo, siempre que enriquezcan su valor. En este sentido, cabe enfatizar las funciones formativas (singularmente ante el fracaso escolar) y de prácticas, así como facilitar la compatibilidad entre estudio y trabajo.

Asimismo, nuestra organización apoya y colabora con movimientos asociativos juveniles, enriqueciendo los canales de información y comunicación con los jóvenes, favoreciendo los desarrollos organizativos de los que quieren dotarse.

## **8. Trabajo e integración de los inmigrantes**

La inmigración es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo para la igualdad y la integración sociolaboral, pero a la vez una oportunidad para adecuar nuestro sistema social y productivo a modelos más justos, solidarios y democráticos. El fenómeno migratorio no es temporal, constituye un flujo continuo de millones de personas que, en un mundo tan desigual, tratan de buscar oportunidades de empleo, de desarrollo personal fuera de su propio entorno o huyen de sus países para preservar su vida o su libertad. De ellos, decenas de miles seguirán llegando cada año a España con la intención de trabajar y desarrollar su vida en nuestro país.

La envergadura del proceso tiene tal magnitud que provoca significativos cambios en la sociedad (cada vez más multiétnica) y en las empresas, por las dispares procedencias de sus colectivos. Una situación que ofrece el gravísimo peligro de una nueva estratificación social y laboral, discriminando a las personas por su origen o identidad étnica y que terminaría arruinando una convivencia civilizada.

Cabe destacar la influencia de una normativa de extranjería que promueve la precariedad laboral, anula la aplicación del principio de igualdad de trato en las relaciones laborales y condena a los trabajadores inmigrantes a largos períodos de clandestinidad y trabajo irregular, impidiendo así su integración social y laboral.

Precisamente el ámbito laboral es un espacio privilegiado para atajar esa amenaza y dar eficacia a una política migratoria, que impulse un proyecto que, básicamente, debería vertebrarse a partir de una equitativa política laboral. Quienes inmigran a España sencillamente quieren trabajar y la suerte de su integración depende del trabajo, donde la acción sindical resulta tan relevante.

Los trabajadores inmigrantes no comunitarios son los más vulnerables a situaciones de explotación y tratos vejatorios, con acusados problemas en tareas como el servicio doméstico, el sector agrario, la hostelería y la construcción, es decir, en aquellas actividades con más permeabilidad de acceso, rotación y precarización de empleo.

Ante tales conductas reprobables por parte de los empleadores, acompañadas por la pasividad de la Administración y la falta de vigilancia de la Inspección de Trabajo, la política migratoria no puede limitarse a proclamar un elemental principio de igualdad de trato, sino que tiene que trabar acciones consensuadas entre los interlocutores sociales y la Administración que garanticen la digna integración de los inmigrantes, sin discriminación alguna, en cualquier esfera de su vida cotidiana.

En tal sentido, resulta clave la puesta en marcha de políticas específicas de inserción laboral, formación profesional y permanencia en el mercado de trabajo. Pero para ello es preciso que se adecúen los instrumentos de seguimiento de la ocupación y calidad del empleo, teniendo en cuenta el país de origen. Esto nos permitiría evaluar la incorporación laboral y también social de este colectivo y la aplicación del concepto de igualdad en el tejido productivo.

Para el inmigrante, un empleo con plenos derechos es un motor de igualdad y una palanca de integración. Para los sindicatos, la integración laboral de este inmenso colectivo y la incorporación y participación del mismo en las estructuras de la organización, es uno de nuestros grandes retos actuales que debemos abordar ya con decisión y firmeza.

## **9. Trabajo y discapacidad**

La UGT entiende el trabajo como un derecho universal y por ello reafirma que las personas con discapacidades deben acceder a él en el marco laboral de empresas ordinarias. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso con la finalidad primordial de las políticas de empleo para trabajadores con discapacidad, como es la integración de los mismos en el sistema de trabajo ordinario y en los centros especiales de empleo considerando ésta última opción en el caso de que el trabajador necesite pasar por un periodo de adaptación, siempre como medida transitoria y no permanente.

Las nuevas tecnologías permiten plantear nuevas modalidades en la organización del trabajo dentro de las empresas y a su vez facilitan la integración de las personas con discapacidad, que con una correcta adaptación del puesto de trabajo en función de la discapacidad de que se trate, están en situación de desarrollar un trabajo productivo con idénticos resultados que cualquier otra persona.

## **10. Las garantías jurídicas y los convenios colectivos**

La naturaleza jurídica del trabajo trasciende a la de un mero contrato civil de prestación de servicios. La estrategia sindical de configuración legal de un marco laboral y una adecuada protección jurídica de los trabajadores se ha plasmado en una legislación propia y, sobre todo, en los convenios colectivos.

Las garantías normativas del trabajo, nacidas de la negociación colectiva, tienen que afrontar un doble reto: la flexibilidad laboral en la empresa y los intereses colectivos e individuales de los trabajadores. Unos retos permanentes en la vida de las empresas, pero que se utilizan como coartadas para desplegar una ofensiva desreguladora y regresiva que trata de individualizar las relaciones laborales y desplazar toda la capacidad de decisión al empresario.

Desde luego, una acción sindical inteligente tiene que destacar las herramientas de gestión que ofrece un convenio colectivo para organizar con eficiencia la vida productiva y poder optimizar la asignación de recursos.

Para ello, la negociación colectiva requiere conocer más y mejor la realidad sectorial y de las empresas. En todo caso, el desconocimiento del tejido empresarial y la desconfianza al hecho sindical son los dos elementos que colaboran en el empobrecimiento de los convenios.

La negociación colectiva debe contemplar la viabilidad económica de las propuestas barajadas, profundizar en los contenidos vinculados a la actividad productiva y hacer más exhaustivos los ámbitos de los respectivos convenios, contemplando toda la realidad laboral económica y social del ámbito geográfico y temporal en el que se negocia.

En la definición de los ámbitos de la negociación colectiva los sindicatos encuentran serias dificultades, con consecuencias graves para la homogeneización de los marcos laborales de los trabajadores de distinta circunstancia o procedencia. La disgregación de los ámbitos de los convenios se agudiza con la externalización de buena parte de la actividad productiva de las empresas, la filialización societaria y la creciente entronización del prestamismo laboral a través de las empresas de trabajo temporal, tres fenómenos que requieren eficaces mecanismos sindicales para su control.

La realidad de las pequeñas empresas necesita, ineludiblemente, una adecuada articulación de la negociación colectiva desde el ámbito sectorial, con suficientes contenidos de regulación para la aplicación directa de los convenios superiores a las pequeñas unidades empresariales, donde apenas existe representación y menos aún negociación. Además, debemos realizar un mayor esfuerzo sindical creando infraestructuras de apoyo para los delegados de personal que sirvan para impulsar el crecimiento de estas figuras en la pequeña empresa donde la presencia sindical es frágil y reducida.

Por otra parte, la singular situación de los empleados públicos necesita una decisiva determinación sindical para establecer sus ámbitos reales de negociación colectiva. Es necesario superar la interesada contraposición de la preeminencia de la Ley frente al convenio colectivo.

La práctica democrática termina desvelando estos reductos autoritarios que rehúyen la negociación al establecer la interlocución con los empleados públicos. La dinámica social obligará a reformular los límites de regulación del poder reglamentario, reservando un espacio de autonomía de las partes donde no quepa la invasión ni el dictado unilateral.

Los sindicatos tienen que seguir reclamando las necesarias facultades de actuación en la negociación colectiva y, entre las más importantes, el respeto al derecho de huelga.

Por último, en los objetivos de los convenios y en la ampliación de su malla regulatoria, tienen que estar presentes los intereses específicos (y no sólo los generales) de los trabajadores. Frente a la idea de uniformización, hay que encaminar los reglamentos colectivos hacia la consecución de derechos individuales que los trabajadores sientan como propios, en su particular inserción en la empresa.

## **11. El derecho de participación**

La complejidad sociológica que caracteriza el mundo del trabajo en los países económicamente avanzados ha tenido consecuencias en las relaciones de propiedad y en la capacidad para la toma de decisiones económicas. Se han reforzado los mecanismos que ligan la toma de decisiones a la propiedad de los activos económicos y al mismo tiempo la globalización creciente aleja los centros de decisión de la realidad social, superando la capacidad política y dificultando en la práctica el control democrático de tales decisiones.

En este contexto la empresa no puede ser un punto duro de la cadena social en una sociedad democrática. Las empresas tienen que asumir una importante responsabilidad social y deben abrir paso a los intereses colectivos e individuales de los trabajadores.

Además, las nuevas estrategias de gestión en las empresas más dinámicas coadyuvan a una mayor participación de los trabajadores en el desarrollo de iniciativas, el trabajo en equipo y los procesos de colegiación de las decisiones. En todo caso, la participación es un requisito imprescindible para una adecuada estrategia de mayor flexibilidad y adaptabilidad laboral de las empresas. Por eso, la acción sindical debe actuar en defensa del derecho de participación de los trabajadores.

Tales ámbitos individuales de participación se completan con el derecho de representación, junto al fortalecimiento de otros derechos de gestión individualizada, como la facultad de reclamación a todos los niveles o la posibilidad de denegación ante tareas peligrosas.

En la progresión democrática de las empresas son insustituibles los derechos colectivos de información, consulta y cogestión. La participación colectiva requiere una directa vertebración sindical

para compartir los retos de gestión empresarial, especialmente los vinculados al desarrollo estratégico, la planificación, los cambios productivos y las transformaciones societarias.

## V. LA GLOBALIZACIÓN Y EL DESARROLLO MUNDIAL EQUILIBRADO

La mundialización de la economía es un hecho y la globalización que arrastra es un proceso inexorable pero no por ello ingobernable. La confrontación entre la encendida defensa de los neoliberales y el rechazo socio-ecológico de los grupos alternativos es la expresión más clara de la ambivalencia de los resultados de la globalización.

Cada uno de estos dos frentes se ha dotado de sus propios foros internacionales de referencia en el comienzo de siglo, Davos versus Porto Alegre.

Unos exploran las inmensas oportunidades, sobre todo financieras, de los mercados económicos mundiales con la extensión de los negocios y la interpenetración de las empresas y las finanzas. Otros denuncian la evidente desigualdad social creciente a escala planetaria y la oclusión de la esperanza, con la concentración tecnológica y la degradación medioambiental.

La globalización económica y financiera está facilitando a las grandes empresas multinacionales su movilidad por todo el planeta, sin apenas restricciones, en busca de legislaciones laborales y medioambientales más favorables a sus intereses, con efectos perversos sobre la calidad del empleo y la regulación del mercado de trabajo.

La mundialización está siendo desequilibradora. Con una globalización financiera y económica que facilita los flujos especulativos y los refugios en paraísos fiscales, mientras que se establecen restricciones de la exportación para los bienes agrícolas de los países más pobres y, más aún, al movimiento de las personas que buscan un trabajo.

Como colofón a esta disyuntiva, el Informe del Banco Mundial que se asoma al siglo XXI (2000–2001) resalta la contradicción más flagrante: “Nuestro mundo se caracteriza por una gran pobreza en medio de la abundancia”.

Todo ello nos sitúa ante una evidencia: los problemas del mundo son universales, las soluciones también. Los ciudadanos, no sólo las instituciones internacionales, palpan progresivamente la irrupción de esa nueva dimensión para atender y responder a su propia inserción social. Todo está mundializado, desde el equilibrio de la naturaleza hasta los mercados financieros, pasando por la globalización del terror.

UGT participa de esa conciencia de globalidad y compromete su propio esfuerzo en la movilización para equilibrar este ineludible proceso en el mundo.

Frente a la agudizada desigualdad mundial, la alternativa será la internacionalización de la riqueza y el bienestar, difundiendo los avances tecnológicos y productivos. Frente a un proceso gobernado por un reducido grupo de empresas cabe plantear la mundialización de la política, cuya esencia no puede ser otra alternativa que la regulación democrática.

La globalización del bienestar, la globalización democrática, deben afrontarse con soluciones igualmente globales, entre otras, la búsqueda por los sindicatos de un modelo laboral y social para los trabajadores de todo el mundo. Pero las respuestas no pueden esperar a la existencia del ámbito universal, sino que tienen que articularse desde la realidad más inmediata (particularmente en la acción sindical), asegurando la consistencia de nuestras actuaciones con el propósito global comprometido.

UGT promoverá en todos los ámbitos donde tiene capacidad de actuación, un crecimiento sostenible, basado en un nuevo modelo de desarrollo duradero, que garantice la prosperidad material desde el respeto al medio natural y con garantías de cohesión social y solidaria. Igualmente desde nuestro Sindicato es necesario propiciar una nueva cultura en la organización de la producción, el trabajo, el consumo y las nuevas formas de vida.

En la esfera internacional algo está cambiando, aunque de momento sean más los discursos que las prácticas, como si en el siglo XXI despertara la “cuestión social” a nivel mundial, del mismo modo que esa conciencia se abrió paso en el siglo XIX a nivel nacional. La aceleración del compromiso exige una participación más democrática y directa, así como la consolidación de un incipiente movimiento participativo con presencia sindical.

Las reformas institucionales de los grandes organismos internacionales, por exasperantemente lentas que nos parezcan ante la magnitud de los problemas, resultan insustituibles para dimensionar y programar acciones y sobre todo vincular a los Estados. UGT en su ámbito y, especialmente, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) tienen que seguir con perseverancia cada uno de estos grandes proyectos estableciendo compromisos, difundiendo sus contenidos y promoviendo su cumplimiento.

## **1. Un mundo mejor para todos**

Bajo ese irreprochable epígrafe se articula una modesta iniciativa de las Naciones Unidas, si bien afecta a lo más importante, la pobreza, abordando el nudo gordiano de su erradicación en el mundo. La desigualdad entre países avanzados y atrasados es cada vez mayor, pero también dentro de los países industrializados los desequilibrios sociales y la marginación aumentan, extendiendo el fenómeno de la pobreza a amplias zonas del planeta.

Es ésta una situación éticamente inaceptable, que supone un peligro más que evidente para las relaciones internacionales pacíficas y un despilfarro de recursos insostenible en el largo plazo.

Por ello, UGT reafirma su firme compromiso en la lucha por la erradicación de la pobreza.

Este propósito es tan incuestionable que incluso organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han mostrado su escasa sensibilidad y sus reticencias a abordar este problema crucial y global, han fijado el año 2015 como plazo para reducir la extrema pobreza que actualmente padecemos a la mitad, y complementando este proyecto con una apuesta decidida por la inversión y la educación, de tal modo que pudiera garantizar la educación primera universal para esa fecha.

Para ello, será necesario gobernar el cambio económico haciéndolo más participativo e integrando una dimensión social adecuada en sus programas y medidas.

## **2. Una globalización de contenido social**

El reto de la globalización ha pasado a un primer plano en un mundo donde no cabe la vuelta a la “aldea”, al microcosmo de cada cual, condenando a la mayor parte de la humanidad a su propia suerte.

El movimiento sindical internacional ha sido de los primeros en denunciar la gravedad de los efectos de la actual mundialización de la economía y al mismo tiempo exigir una reorientación del proceso de globalización.

La CIOSL ha articulado un proyecto que hacemos igualmente nuestro para fijar las grandes reformas que se requieren para democratizar la globalización y dotarla de un contenido social. Entre otras medidas, cabe señalar:

### ***Reformas institucionales***

- El fortalecimiento de Naciones Unidas para la dirección del proceso.
- El cambio de orientación del Banco Mundial y el FMI que con sus políticas de austeridad y ajustes estructurales a veces provocan más daños que beneficios.
- El papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en las condiciones de intercambio, procesos y métodos de producción.

### ***Reformas financieras***

- Un tratamiento realista de la deuda que hoy asfixia a la mayoría de las naciones, alargando sus plazos en los países en desarrollo y condonándola a los más pobres.
- El establecimiento de una tasa internacional sobre las transacciones en divisas, que frene los flujos financieros especulativos y financie programas de desarrollo en el mundo.

- La coordinación de las políticas fiscales y monetarias entre los bloques económicos más poderosos, para dar estabilidad a la economía y las divisas.
- Eliminación de los paraísos fiscales.

### ***Reformas laborales***

- Someter la regulación del trabajo a las normas internacionales emanadas de la OIT, en particular los convenios que persiguen el trabajo forzoso (105), el trabajo infantil (138), la discriminación étnica o ideológica (111), así como los que buscan la plena igualdad hombre/mujer y la libertad sindical.
- La acción sindical en la “empresa global”, equilibrando el despliegue territorial del tejido empresarial y estableciendo un código social de conducta de las empresas multinacionales.

Un paquete de reformas que cobran su sentido si se completan a nivel nacional con un cambio, que desde el sindicato debemos exigir, en la orientación de las políticas estatales (con el apoyo sindical), ya que éstas siguen siendo el motor fundamental de cualquier compromiso reequilibrador.

No hay que olvidar la competencia directa de los Estados, no sólo a la hora de impulsar las reformas internacionales sino cuando ponen en marcha sus propias medidas, desde las ayudas presupuestarias del 0,7% (que únicamente cumplen media docena de países nórdicos y centroeuropeos) a otros programas de cooperación, desarrollo y transferencias tecnológicas.

### **3. Un nuevo perfil del sindicalismo internacional**

La globalización no es una fuerza ingobernable de la naturaleza, es el producto de la interacción de sujetos sociales que pueden y deben modificar su conducta actual por otra más equilibrada que haga más aceptables los resultados del proceso.

En este sentido, la tarea sindical a nivel internacional es ingente y, desde luego, trasciende con creces los mensajes de solidaridad y las modestas ayudas entre organizaciones de diferentes latitudes. El plano mundial requiere un sujeto activo que asuma el protagonismo transformador propio del sindicalismo en cualquier otra esfera de actuación.

Es cierto que los sindicatos no encuentran, en el plano internacional, un interlocutor social, empresarial o político, que unifique el proceso de establecimiento de compromisos, pero ello no impide una actuación sindical en ese ámbito:

- Institucional, impulsando reformas de los organismos internacionales y exigiendo el cumplimiento de los convenios y compromisos.
- Geográfica, animando y siguiendo los procesos de integración de mercados y sus cláusulas sociolaborales a nivel subcontinental.
- Empresarial, con las iniciativas, a través de los secretariados profesionales internacionales, de acción sindical en las empresas multinacionales.
- Coordinación sindical, vertebrando a las confederaciones sindicales nacionales en un proyecto común.

La CIOSL, donde UGT participa activamente en tanto que es uno de los sindicatos fundadores, debe jugar un nuevo papel que dote a esta organización de un perfil de auténtica confederación internacional.

En la práctica, la CIOSL es hoy la gran confederación sindical internacional (por el desplome de la Federación Sindical Mundial y la menor relevancia de la Confederación Mundial del Trabajo) ya que su amplia afiliación (157 millones de trabajadores) y su extensa implantación (en casi todo el mundo) permiten su incidencia práctica en el ambicioso proyecto de democratizar la globalización. Valoramos el movimiento sindical internacional de clase como la mejor garantía de los derechos humanos y sindicales permanentemente cuestionados en el mundo actual

## VI. LA NATURALEZA Y LA ACCION MEDIOAMBIENTAL

El desarrollo económico del último siglo y medio, sin precedente histórico por su envergadura e intervención en la naturaleza, se ha basado (y lo que es más grave, en parte ha sido posible) en la destrucción irreversible de una parte de las reservas naturales y de los recursos que en ellas se encuentran, así como del hombre que forma parte de ellas.

En el siglo XX la población se ha cuadruplicado, pero la producción industrial se ha multiplicado por dieciocho, con un modelo productivo que está agotando los recursos naturales, generando deforestación, reducción de pesquerías y provocando efectos negativos sobre el entorno (contaminación atmosférica, de aguas y suelos), entre otros impactos.

Ahora bien, no podemos plantear la paralización del crecimiento cuando cerca de una quinta parte de la humanidad no tienen ni siquiera disponibilidad de agua y precisamente su insalubridad genera el 80% de las enfermedades.

Con el actual modelo productivo, si en las próximas décadas tratamos de nivelar las condiciones de vida de toda la humanidad con las que disfrutaban una sexta parte de ella, la velocidad de destrucción de la naturaleza se dispararía hasta cerca de doscientas veces respecto al ritmo de degradación actual.

Por imperativo moral tenemos que responder a la pobreza y las pésimas condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Por limitación física el actual modelo de crecimiento -que por otra parte ha generado enormes desigualdades- no puede dar respuesta a aquella exigencia social.

Nosotros propugnamos una ecología humanista, resaltando que el mayor y más lacerante de los desequilibrios es el hambre, la miseria y la insalubridad que padecen miles de millones de seres humanos. Un planteamiento que al mismo tiempo debe ser compatible con la revisión de una vieja concepción del hombre como rey de la naturaleza, limitada ésta a ser una mera realidad instrumental, puro decorado de la actividad humana.

En una palabra, resulta imprescindible cambiar el rumbo de la actividad económica con un objetivo permanente claro: el equilibrio del ecosistema.

Las líneas de actuación de esta ineludible apuesta medioambiental tienen dimensiones económicas, sociales y laborales para hacer posible un desarrollo sostenible, esto es, físicamente posible, apostando por el diálogo social, al objeto de que las organizaciones sindicales aporten su experiencia en estos temas y puedan participar de esta consecución, sin olvidar en ningún momento el concepto de hombre, como individuo, donde se engloba como trabajador y como ciudadano.

Las políticas económicas, sectoriales y medioambientales carecerán de toda viabilidad de futuro si no integran la dimensión medioambiental que determina algunas de ellas y condiciona su totalidad, entendiendo el medio ambiente como una política transversal presente de modo horizontal en todas ellas.

Las políticas ambientales del nuevo siglo deben vincular directamente el progreso de la sociedad con la protección del medio que nos rodea. En este sentido, la reconstrucción ecológica de la sociedad industrial y un cambio en los estilos de vida son fundamentales para llegar a una verdadera transformación social sostenible.

UGT debe cooperar en sus compromisos medioambientales con las organizaciones y movimientos que defienden el valor de la naturaleza, con planteamientos ecológicos equilibrados, revisando críticamente tanto el viejo productivismo industrial, como el fundamentalismo conservacionista.

Estamos todavía lejos de vislumbrar el alcance de un nuevo proyecto ecológico, pero UGT adelanta su vinculación a unos compromisos básicos:

- La educación medioambiental para conocer y respetar la naturaleza. En todos los niveles educativos y específicamente dirigida a nuestros afiliados y representantes sindicales.
- La revisión de la acción sindical para impregnarla de los nuevos valores, ya que la vida productiva en general y la empresa en particular son una inevitable fuente de degradación medioambiental, en primer lugar de la propia salud de los trabajadores.

Para ello debemos introducir nuevos planteamientos como:

- o Trabajar el medio ambiente desde la Negociación Colectiva

- o Potenciar la figura del Delegado de Medio Ambiente
- o Favorecer el participación de los trabajadores en los SGMA (Sistemas de Gestión Medioambiental)
- o Acceso a la información medioambiental de la empresa
- La adecuación de las políticas de crecimiento y empleo, propugnando la reorientación del modelo en la consulta y la negociación de nuevos proyectos industriales o sectoriales.
- La gestión del agua, como el más importante de los recursos, escaso y desigualmente distribuido, buscando el equilibrio territorial, las políticas de ahorro y el reciclado de las aguas, la introducción de nuevas tecnologías y el uso racional del recurso hídrico.
- La política energética que, garantizando el suministro al ciudadano, promueva las inversiones en seguridad y en el perfeccionamiento de las tecnologías existentes, para evitar o reducir los efectos nocivos, e impulse la producción energética tradicional hacia las energías renovables, fomentando la eficiencia y ahorro energético y la creación y consolidación de puestos de trabajo.
- La potenciación de los recursos forestales, dentro de una gestión del patrimonio natural, incentivando el desarrollo rural y la estabilización de la población en el campo.
- La seguridad alimentaria, con una adecuada identificación y evaluación de riesgos, revisando las políticas de alimentación humana y animal, en que las Administraciones Públicas deben asumir su responsabilidad en el funcionamiento de los mecanismos y órganos de control, así como impulsando las líneas de investigación que garanticen la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente.
- La ordenación territorial, con un desarrollo urbanístico que recupere la ciudad como espacio de valor social y resuelva los diferentes niveles de habitabilidad campo/urbe.
- El establecimiento de un modelo de movilidad sostenible basado en un sistema de transporte público más planificado, eficiente e incrementado a los polígonos industriales.

## VII. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Resulta lógico pensar que el crecimiento económico sólo encuentre legitimidad en la prosperidad de la población. La economía no encierra una finalidad propia, se dirige a satisfacer necesidades humanas y objetivos sociales, y es ahí donde la sociedad necesita debatir sobre sus fines. Para UGT, los objetivos más importantes de la actuación económica son el pleno empleo, la justa distribución de la riqueza y la mejora de la calidad de vida que sea ecológicamente posible.

La atención de este mapa de objetivos obliga a la adecuación de un modelo de crecimiento ciegamente cuantitativo, desplazando el interés de “cuanto” a “dónde y cómo” se crece. Además de la traslación del énfasis a lo cualitativo, todo el crecimiento estará condicionado por los propios límites físicos que impone el contorno medioambiental.

La eficacia del modelo es la base para atender las necesidades sociales, en nuestro caso en un insuficiente Estado de Bienestar. Las debilidades económicas y las deficiencias estructurales en España, más allá de los considerables equilibrios macroeconómicos alcanzados, generan bajos niveles de renta y empleo en una simple comparación con los países europeos.

La consecución de una convergencia nominal de las grandes magnitudes económicas es un factor de estabilidad, pero directamente no arrastra a la convergencia real de condiciones de vida. De ahí la importancia de acertar con un modelo de crecimiento que nos encamine a una equiparación social dentro de la Unión Europea.

### 1. Crecimiento equilibrado y generación de empleo

Todo empieza por resituarse como primer objetivo al empleo, base de todo nuestro modelo social. Con este propósito, la economía española necesita profundas transformaciones estructurales que nos doten de un sector industrial más puntero, unos servicios de nueva generación, una agricultura eficiente con equilibrios territoriales y, sobre todo, unas empresas innovadoras y competitivas.

Estas transformaciones necesitan una política económica más activa, para la cual los márgenes de maniobra son cada vez más estrechos por parte del Estado, pero no por ello se puede rehuir la eficacia de múltiples acciones en los ámbitos donde los poderes públicos conservan capacidad de actuación, tanto la vía de los programas públicos como la implementación de las regulaciones horizontales y sectoriales.

Un primer punto de atención estaría en una política activa para dotarnos de una base industrial sólida, tecnológicamente avanzada y competitiva en el exterior. Tal objetivo sería la mejor garantía para el empleo y el bienestar, puesto que la industria es el sector productivo que mayor interrelación sectorial genera, transformando la orientación y la calidad de los servicios. La nueva economía no es propiamente industrial, pero sí su sustento tecnológico, por lo que los esfuerzos en investigación y desarrollo son decisivos, máxime en España donde los gastos en I+D apenas llegan a la mitad de la media comunitaria.

Los servicios, hoy cajón de sastre de múltiples tipos, desde los de alta tecnología a las prestaciones de valor marginal, necesitan una reorientación para crecer con el propio nivel de renta, pero sobre todo, para cualificar y adecuar su oferta en la Sociedad de la Información, hoy posible por un exponencial crecimiento de las comunicaciones.

Pero sigue siendo igualmente crítico disponer de unos servicios más avanzados en educación y sanidad, del mismo modo que el estratégico sector turístico necesita una mejor estructuración de su oferta e igualmente se requiere un incremento sustancial de las infraestructuras públicas.

El desarrollo de los espacios rurales y la defensa del patrimonio natural obligan a una reorientación de nuestro sector agropecuario en la Política Agraria Común, favoreciendo así la equiparación de rentas y el equilibrio territorial. Para ello, las políticas gubernamentales pueden ayudar a racionalizar las explotaciones, rejuvenecer y formar a los trabajadores y favorecer los canales de comercialización y la calidad de los productos. Ello requiere un cambio estructural en las políticas de acompañamiento a la

agricultura europea, apostando por los agricultores más necesitados de dichas políticas, mediante un sistema de modulación de las ayudas de la P.A.C.

Las Administraciones deben también facilitar otras alternativas complementarias a través del ocio y el turismo rural.

La intervención del Estado en la economía reducirá su función sectorial en los nuevos marcos regulatorios europeos y en mercados cada vez más liberalizados. Pero las políticas públicas de intervención de los Estados seguirán siendo decisivas ante mercados imperfectos y, en todo caso, el papel del gasto público (tanto en dimensión como en composición) resulta crucial junto al consumo a la hora de impulsar políticas de demanda, imprescindibles para la consolidación del crecimiento económico.

En este sentido, el gasto público (independientemente del valor intrínseco de las inversiones públicas y los gastos sociales) es un instrumento rápido y eficaz para impulsar temporalmente la reactivación, como cíclicamente descubren y utilizan todos los gobiernos (más allá de ideologías económicas) junto a la política monetaria en momentos de recesión, eso sí, con diferente eficacia en su instrumentación y a pesar del “desideratum” del equilibrio presupuestario.

Pero un nuevo modelo de crecimiento tiene igualmente que favorecer el cambio de rumbo ecológico y pasar de la protección reparadora del medio ambiente a la protección preventiva. El uso de tecnologías no contaminantes es tan deseable como incipiente y todavía estamos lejos de minimizar los insumos de energía que permitan, entre otras cosas, una sólida renuncia a la energía nuclear. El fomento de la economía del reciclaje y el desarrollo de productos duraderos que no exacerben el consumismo, son también exigencias de un desarrollo sostenible.

## **2. Una equitativa distribución de la riqueza**

La asignación de rentas derivadas de la distribución y la redistribución del producto social se apoya en todas las piezas que conforman el Estado del Bienestar, pero sindicalmente merecen acentuarse varios objetivos:

- a) Lograr el pleno empleo, ampliando la base de las rentas del trabajo.
- b) Mejorar el poder adquisitivo de los salarios, distribuyendo equitativamente los incrementos de productividad.
- c) Favorecer los equilibrios territoriales, generando oportunidades equitativas de vida y trabajo en todas las regiones y favoreciendo la cohesión económica y social.
- d) Establecer una fiscalidad más justa, reequilibrando esfuerzos en un ejercicio de progresividad fiscal, que favorezca la cohesión social.

### **• El pleno empleo.**

El pleno empleo, como sumatorio del acceso libre e individual a un puesto de trabajo adecuado, es la mejor expresión de valor de los resultados económicos.

Su logro requiere tupir una fina malla de políticas activas que eviten las bolsas de desempleo coexistiendo con las demandas de empleo vacantes. Un fenómeno de marginación que puede instalarse en determinados colectivos bien por su ubicación en la pirámide poblacional (grupos de jóvenes, mujeres y capas de mayor edad), bien por su baja cualificación profesional, u otra circunstancia personal.

En relación a los trabajadores discapacitados, es una exigencia sindical el cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), lo que supondría una importantísima incorporación laboral para este colectivo.

El crecimiento de la población activa y su equiparación a la ocupada es una excelente vía de distribución de la riqueza, con efectos colaterales de extensión de la remuneración a los colectivos de jóvenes y equiparación hombre/mujer en la generación de rentas.

UGT considera que el pleno empleo es perfectamente posible, si se dan las condiciones requeridas, para lo cual es preciso un compromiso general dirigido al objetivo del empleo para todos: la orientación de las políticas y actuaciones públicas hacia la creación efectiva de empleos, las garantías de derechos laborales que impidan la explotación y la atención y cobertura suficiente de las

necesidades sociales; en definitiva, un compromiso de equidad y justicia en la distribución y redistribución de la renta, tanto vía ingresos como vía gastos. Todo ello conducirá al pleno empleo y por tanto a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

- **Las mejoras salariales.**

La negociación de los incrementos salariales es la forma directa de participar en los crecimientos de productividad, distribuyendo más adecuadamente rentas del trabajo y del capital, sin perjuicio de combinar estas políticas con la maximización del empleo y la reducción del tiempo de trabajo.

La política salarial contribuye a diseñar, con aceptación social, la estructura y los abanicos salariales, como una segunda derivada del esfuerzo distributivo perseguido. En particular, resulta imprescindible fijar un salario mínimo general y de convenio que garantice, desde la dignidad retributiva, las condiciones de vida a los que menos ganan.

- **Los equilibrios territoriales.**

Nuestro modelo territorial, constitucionalizado como Estado de las Autonomías ha permitido una importante descentralización del estado y la asunción de amplias capacidades de autogobierno para las Comunidades Autónomas, pero el funcionamiento del sistema dista mucho de la perfección haciéndose necesario avanzar en varias direcciones. De una parte desarrollar la capacidad de gestión de los Ayuntamientos para evitar precisamente nuevos centralismos autonómicos y al mismo tiempo mejorar la capacidad de las Comunidades Autónomas de participar en la elaboración de las políticas que desde el Estado se diseñan con efectos directos sobre estas. En este modelo, los sindicatos pueden jugar un importante papel vertebrador, actuando sobre los desequilibrios territoriales.

En este contexto, la unicidad del mercado de trabajo es un principio respetado que debiera dar amparo a la igualdad de oportunidades territoriales en el acceso al empleo, sin perjuicio de las políticas activas de crecimiento y desarrollo regional que se puedan impulsar en el ámbito autonómico.

Pero el calado de fondo en la distribución de la riqueza está en las políticas de equilibrio regional, en los mecanismos que hagan posible condiciones de vida equitativas en cualquier punto geográfico. Para ello reivindicamos un mayor esfuerzo nacional que ayude a sustentar estas políticas de reequilibrio actualmente soportadas, casi en exclusividad, sobre las políticas de intervención estructural comunitaria. La acción sindical asume una enorme responsabilidad en el equilibrio territorial deseable, ya que la negociación colectiva articulada es el mejor instrumento para la homologación salarial interregional.

Para UGT, la estructura del Estado español en autonomías con competencias propias lo hace más democrático, al acercar los centros de decisión al ciudadano, máxime teniendo en cuenta que los órganos autonómicos también son Estado y forman parte de él.

En definitiva, entendemos que el modelo social del Estado de las Autonomías tiene que basarse en dos principios esenciales: la vertebración del Estado y la cohesión social y territorial.

- **La progresividad fiscal.**

La política fiscal, esencial en el Estado de Bienestar, cierra con las acciones redistributivas, el ciclo de una justa distribución de la renta. UGT se identifica con el precepto constitucional que exhorta a que todos contribuyamos de acuerdo con nuestra capacidad económica, bajo los principios de igualdad y progresividad, con el propósito de disponer de una adecuada financiación para la atención de las necesidades sociales básicas que deben ser objeto de protección.

Ello implica afrontar la pregunta de ¿Impuesto, para qué?, y de este modo evitar la dinámica de reducir la fiscalidad ciegamente, haciendo abstracción de los efectos sobre la protección social (sanidad, educación, prestaciones, ....) y sin un riguroso contraste sobre la propia redistribución de la carga fiscal entre colectivos sociales.

Sin embargo, a pesar de la insuficiencia de nuestros recursos públicos respecto al conjunto de países de la Unión Europea, se han acumulado durante décadas sucesivas reformas parciales que reducen la capacidad recaudatoria, trastocan la progresividad, rebajan la fiscalidad de las rentas del capital y aumentan los impuestos indirectos. Todo ello dentro de una pasividad frente al fraude fiscal, principal causa de la regresividad e insuficiencia de nuestro sistema.

Con tales parámetros UGT debe perseverar en la defensa de una fiscalidad más justa, con una lucha decidida contra el fraude fiscal y una mejor distribución de la carga tributaria. Ello implica una revisión del tratamiento de las rentas del trabajo, sin perder de vista la necesidad de avanzar en la armonización fiscal a nivel europeo, para evitar, entre otras cosas, una dinámica territorial de captación defiscalizada de capitales.

## VIII. EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA

El edificio del Estado de Bienestar es la más completa expresión del consenso básico de nuestra sociedad, gozando en todos los países europeos de una aceptación social sólo comparable con los propios valores del sistema democrático.

El modelo social europeo se basa en la cohesión y la redistribución con la prevención social, la universalidad y gratuidad de servicios esenciales y la provisión de bienes colectivos y equipamientos públicos. Un amplio panel de coberturas cargadas de evidentes razones de solidaridad y justicia social, pero al mismo tiempo impregnadas de un gran valor para el sistema económico que necesita mecanismos de flexibilidad y externalización de riesgos.

La clara virtualidad del modelo no exime de disfunciones en la construcción del Estado de Bienestar, con efectos no deseados en los mecanismos protectores o abuso de las prestaciones absolutamente condenables, que algunos aprovechan para deslegitimar todo el modelo. La defensa del sistema tiene que ir unida a un atento análisis de los problemas de financiación, la naturaleza de las coberturas, el rigor en el uso de las prestaciones, pero sin perder de vista los objetivos de la erradicación de la pobreza, la marginación o la exclusión social y laboral, como exponente de la lucha por la igualdad y la justicia social, en el camino hacia lo que debe ser un auténtico Estado social y democrático de derecho.

De ahí la necesidad de una revisión crítica y objetiva que, teniendo en cuenta la demanda social y las condiciones socioeconómicas, posibilite una redefinición del sistema que favorezca su adecuación, eficacia, y eficiencia, garantice la cohesión social, la universalidad de los servicios esenciales y gratuitos de calidad, la total cobertura social y acierte en la naturaleza de las prestaciones. Pero esta apertura de miras no puede confundirse con posiciones desestabilizadoras que prácticamente plantean la ruptura de los compromisos sociales del Estado o concepciones rechazables que trastocan (en la dicotomía mercado/derechos) la jerarquía básica de los valores constitucionalizados, presentando como alternativa un modelo de Estado mínimo o asistencialista.

En España, los poderes públicos tienen el mandato constitucional que les obliga a sostener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice unas prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Un compromiso, en cuya consolidación y perfeccionamiento deben participar los interlocutores sociales junto al propio Gobierno.

UGT, con igual determinación, defiende la consolidación y mejora del sistema de protección social con carácter público, solidario y proactivo junto con el resto de los valores constitucionales que integran el Estado de Bienestar como la educación, la sanidad, la cultura, la vivienda y su desarrollo a través de todos los servicios públicos. Una defensa necesaria cuando estamos lejos de la equiparación de nuestros gastos sociales y nuestros niveles de protección social a la media comunitaria.

### 1. La protección integral de la salud

Nuestro modelo sanitario, fruto de un importante consenso, tiene que hacer realidad los principios en los que se basa la protección del bien más preciado: la salud. UGT cree firmemente que el derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos sólo puede hacerse efectivo mediante un Sistema Nacional de Salud, integrado por los servicios de salud de la Administración Central del Estado y de las Comunidades Autónomas, con financiación, provisión y gestión públicas que, como tal, garantice, por un lado, la aplicación de los principios básicos de universalidad, equidad, gratuidad y eficacia y, por otro, tenga al usuario como centro del mismo. Unas garantías igualmente vivas con la descentralización sanitaria.

Frente a esta nueva realidad descentralizada, es necesaria una mayor coordinación, a fin de asegurar una calidad y prestaciones homogéneas en el Sistema Nacional de Salud.

Para ajustar el modelo a los principios que lo inspiran, UGT constata la necesidad de realizar un conjunto de tareas pendientes como la consolidación de una atención primaria que no se reduzca a la atención de la enfermedad, la reducción drástica de las listas de espera, la inmediatez de las pruebas diagnósticas, y con un potente sistema de desarrollo de las políticas de salud pública y laboral.

La prevención, promoción y educación para la salud requieren nuevas prestaciones en el catálogo (como las bucodentales, asistencia sociosanitaria a domicilio a crónicos, enfermos mentales, etc, creación de institutos de salud pública y alimentaria y potenciación de la salud mental), el uso más racional del medicamento, la sanidad domiciliaria y las clínicas de reposo o convalecencia.

## **2. La intensidad protectora de las pensiones**

Nuestro sistema de pensiones de naturaleza estrictamente pública, apoyado en un sistema de reparto, debe ser solidario, equitativo y seguro. Partimos de una realidad que, sin ser desdeñable, está lejos de ofrecer la intensidad protectora que necesitan las pensiones.

Las pensiones asistenciales y no contributivas tienen que constituir un zócalo básico de protección, red de mínimos en las prestaciones económicas, financiadas por vía presupuestaria por su propia naturaleza solidaria. En la actualidad, estas pensiones, por su ínfima cuantía e incluso por su limitada extensión, tan solo han desplegado sus primeros peldaños, y no han llegado a responder ni al espíritu que las anima, ni a la demanda y necesidad social real.

Nuestro sistema contributivo requiere:

- Completar su extensión y avanzar en equidad e igualdad de trato (es el caso de las limitaciones en invalidez, tal y como está sucediendo con los trabajadores afectados por el VIH/SIDA, en la que se deben conjugar los derechos y los riesgos de deterioro personal).
- Revisar las cuantías mínimas (especialmente de viudedad y orfandad, aunque la clave está en el bajo SMI de referencia).
- Evitar nuevos criterios de cálculo que supongan recortes efectivos de cuantía.
- Solucionar la penalización actual de las jubilaciones anticipadas y atender opciones adecuadas de prejubilación (cuando tenemos la edad real media de jubilación más alta de Europa) que conjuguen derechos con oportunidades para los ajustes de plantilla.

## **3. La extensión de la protección por desempleo y la incapacidad laboral**

Desde un cínico binomio moral, por parte de algunos neoliberales se ha formulado como incentivo a la actividad económica una paradoja social en la que el parado, cuanto menos cobertura tuviera más se animaría a buscar un empleo; el empresario, cuanto más beneficios obtuviera más ganas le generarían de hacer negocios.

Implícitamente, algo ha calado de esa desvergonzada creencia en la doble motivación social, a la hora de articular silenciosamente una dualidad de trato y culpabilizar el comportamiento personal de los propios trabajadores en paro, justificando así con más conformidad moral, la insuficiente cobertura social. En España, menos de la mitad de los trabajadores en paro disfruta de alguna protección por desempleo.

Sin embargo, empíricamente se constata que la protección por desempleo (prestaciones económicas, formación y orientación profesional) mejoran notablemente el éxito en la búsqueda de un empleo adecuado (no cualquier cosa, sino lo que maximice la capacidad laboral), amén del insustituible valor social de las coberturas para la propia subsistencia.

UGT debe desempeñar un papel impulsor para mejorar la cobertura social de los desempleados y eliminar los intentos de culpabilización que pretenden agravar más esta situación.

Para ello, UGT mantiene la defensa de una carta de derechos de los trabajadores en paro, que tiene como ejes fundamentales el derecho al trabajo y a la dignidad como trabajadores y como ciudadanos, y que les debe garantizar una educación y formación adecuadas, el funcionamiento eficaz de los Servicios Públicos de Empleo, una protección por desempleo suficiente y todos aquellos aspectos que permiten hacer eficaz el ejercicio de sus derechos como ciudadanos (movilidad y libre circulación, propia imagen, acceso a los bienes culturales y sociales, etc).

Por estas razones de elemental compromiso social y probada eficacia económica, UGT apoya decididamente una reforma que refuerce el sistema contributivo para todas las modalidades de contrato

con una justa equivalencia entre cotización y duración. Al mismo tiempo, reclamamos una verdadera prestación asistencial de financiación presupuestaria que universalice la protección a todos los desempleados.

Igualmente, resulta obligado ampliar el alcance de la incapacidad temporal, de la que todavía no se benefician algunos colectivos de trabajadores, preservando su gestión en la propia Seguridad Social.

También es preciso dar una respuesta al derecho de recuperación plena de la salud en aquellos casos en que se requiere una incorporación progresiva al puesto de trabajo, con un seguimiento específico desde los servicios públicos de salud.

#### **4. El desarrollo de la protección social**

La protección social tiene que cubrir un amplio abanico de contingencias que debiera prestar la Seguridad Social, con una gestión básicamente integrada en un sistema público unitario y solidario como la mejor garantía de igualdad para todos los ciudadanos en sus derechos sociales.

Todo ello sin perjuicio del deber de otras Administraciones (especialmente las Comunidades Autónomas) para impulsar el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos, colaborando en el desarrollo de los servicios sociales y en el impulso de medidas compensadoras en materia de prestaciones asistenciales.

Ciertos cambios sociales (lamentablemente generadores de desigualdad y marginación), las nuevas pautas familiares y las nuevas formas de convivencia (pérdida de su valor nuclear, acentuando la individualidad) replantean los mecanismos de protección para dirigirlos directamente a todas las personas, básicamente inactivas o desempleados, estableciendo derechos propios de protección social, como por ejemplo, la formulación de pensiones para mujeres independientes de la situación de viudedad.

La primera y más inmediata exigencia se dirige a luchar contra la forma extrema de exclusión social, la pobreza, estableciendo la garantía de una renta mínima para todos los ciudadanos, expresión del derecho subjetivo a la propia subsistencia y base de cualquier programa de inserción.

Además, las necesidades sociales de las personas mayores carecen de una suficiente red asistencial, con una falta de despliegue de la asistencia a domicilio o con un reducido volumen de infraestructuras residenciales (en sus diferentes tipos) de la tercera edad. Las limitaciones de estos servicios se hacen todavía más patentes en los casos de las enfermedades invalidantes y los dependientes de cierta edad. El compromiso con nuestros mayores nos obliga a exigir un potente Plan Gerontológico en todo el ámbito estatal.

Las situaciones de riesgo y exclusión que generan minusvalías, las enfermedades degenerativas o crónicas y las drogodependencias, entre otras, también requieren ser atendidas por servicios sociales especializados, con garantía de acceso para todos.

Para tal fin, la debilidad de nuestro sector público resulta patente si de verdad se quiere atender a las ingentes necesidades de servicios sociales propios de cualquier país avanzado. De ahí, surge la necesidad de potenciar y redimensionar la acción pública en el obligado desarrollo de la protección social y luchar contra la privatización de estos servicios fundamentales.

UGT reitera su compromiso de lucha contra las pretensiones de establecer un Estado de mínimos que acentuaría aun más la dualización social. La promoción de auténticas políticas de protección social que garanticen la dignidad de vida a los ciudadanos viene siendo una de las demandas generales de la actuación sindical en servicios sociales. Uno de los factores imprescindibles es la creación de un mercado de trabajo accesible y estable que garantice la ocupación laboral y, por tanto, la integración social.

La acción protectora del Estado, relativa a vejez, enfermedad, invalidez, protección familiar o desempleo, debe complementarse con el desarrollo por parte de todas las Administraciones Públicas de los servicios sociales, que deben ser reforzados dotándolos de recursos suficientes y eficientes.

En España, paradójicamente, a pesar de la tradicional defensa de la familia, disponemos del peor sistema de protección familiar de Europa. Los gastos de protección son veinte veces inferiores a la media comunitaria y la cuantía de ayuda por hijo es realmente ridícula. En este caso, el aumento de la dotación presupuestaria para el establecimiento de una mejor política de protección familiar resulta bastante evidente.

## **5. Los servicios públicos y la calidad de vida**

Los servicios públicos tienen un valor esencial en la mejora de la calidad de vida, garantizando una mayor libertad personal y más opciones individuales, al satisfacer derechos básicos e indispensables para los ciudadanos, configurando así una nueva concepción de la ciudadanía social.

Los acelerados e irreflexivos procesos de desregulación sectorial y privatización de actividades están deteriorando la oferta de servicios públicos.

No se trata de que el Estado deba ocuparse de todo, pero la provisión de estas prestaciones encierra un sentido de obligación de servicio público que, por la forma en que se han hecho estas transferencias de actividades cuando todo se mercantiliza, terminan por difuminarse en perjuicio de los más débiles. En este sentido, disponemos de abundantes ejemplos en transportes, energía, comunicaciones, sanidad, educación, servicios sociales, etc, donde se han perdido garantías de universalidad por una inadecuada regulación, cuando se pasa la provisión de servicios de manos públicas a privadas, sin las garantías completas de prestación de un servicio no discriminatorio.

## **6. El derecho a una vivienda digna**

El derecho a una vivienda digna constituye un derecho social básico. Sin embargo, para una parte importante de la población todavía resulta un objetivo inaccesible, pues las condiciones de mercado y la falta de suelo público elevan el precio de la vivienda, que fundamentalmente se ofrece en propiedad. A este hecho se añade la hiriente paradoja de más de dos millones de viviendas vacías en nuestro país. La política de vivienda requiere una reorientación para hacer efectivo un derecho tan elemental vinculado al bienestar social, sobre la base del fomento público de promociones y las políticas de protección que hagan efectivo el derecho a la vivienda:

- En primer lugar, erradicando el chabolismo y cualquier otra forma de infravivienda y asegurando un alojamiento digno a toda la población.
- En segundo lugar, con un potente parque público de viviendas en alquiler asequibles para jóvenes, ancianos y familias de ingresos medios y bajos.
- En tercer lugar, facilitando el acceso a la propiedad en viviendas protegidas con condiciones adecuadas de precio y financiación, reduciendo su impacto en los gastos familiares.
- En cuarto lugar, incrementando las ayudas para la rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de las ciudades, con el fin de garantizar la recuperación urbanística, social, económica y cultural de las zonas deterioradas.
- En quinto lugar, consiguiendo más suelo público para poner a disposición de los promotores públicos o sociales.

## **7. La educación para todos, la clave del futuro**

Hoy en día ya nadie cuestiona en teoría el valor de la educación, ni siquiera su protección jurídica como derecho fundamental. Ahora bien, desde ese gran pacto de principio pretendemos que la oferta, la gestión y los contenidos educativos no sean fuente de desigualdad y discriminación, sea ésta social, étnica, ideológica y bien afecte a profesores, alumnos o familiares. De igual modo, se hace imprescindible la erradicación de toda barrera física o comunicacional que aún persisten en nuestro sistema educativo.

Un sistema educativo público, integrador, que atienda a la realidad multicultural de nuestra sociedad, participativo y de calidad, gestionado en cada ámbito, como el propio modelo de escuela pública que UGT defiende, seguirá siendo la mejor garantía de la igualdad de acceso para todos y un punto de partida para que una formación de los ciudadanos sólida y crítica haga posible una sociedad libre, justa e igualitaria.

La educación debe asumir nuevas tareas para que ciencia, innovación, tecnología y práctica social encuentren un nexo de unión:

- Los continuos cambios técnicos y la actitud y capacidad de adaptabilidad que estos requieren con la capacidad de manejar críticamente la información y los conocimientos.
- La transformación del concepto de profesión de naturaleza estática por otro más dinámico, que enlace con la adquisición de nuevas cualificaciones y competencias profesionales de los trabajadores.
- La integración de la educación general y la formación profesional, garantizando como derecho la formación permanente a lo largo de toda la vida.
- Los instrumentos frente a la discriminación y la exclusión social

Igualmente, es preciso vencer el retroceso en la educación pública y laica por parte de los poderes públicos, la ausencia de criterios de Estado en las políticas educativas y la insuficiencia de recursos en la acción educativa.

## **8. La diversidad cultural y la convivencia social**

La cultura ha de ser un patrimonio abierto de toda la sociedad que, desde cada entorno, se debiera impregnar de diversidad, respeto y convivencia. El fomento de iniciativas puede ser múltiple: difusión de la diversidad cultural, debate libre, creación artística o información reflexiva.

La influencia decisiva de los medios electrónicos, especialmente internet, junto al despliegue del multimedia abren un apasionante campo de interpenetración de tecnología y cultura cuyas potencialidades son casi ilimitadas, ofreciendo no sólo luces sino algunas sombras como la pasividad en la recepción, la subcultura o la glorificación de la xenofobia y la violencia.

UGT contribuye a un empeño de dignificación cultural, basado en la libertad y la diversidad, en un marco de convivencia y respeto, con aportaciones de signo diverso pero cargadas de sensibilidad social, poniendo a su disposición la infraestructura física, su cultura de intervención social, la actividad formativa y los órganos de expresión del Sindicato.

UGT reitera su compromiso de priorizar entre sus actividades aquellas encaminadas a recuperar la necesaria difusión cultural crítica, desarrollando líneas propias de actuación y señalando la actual situación de los medios de comunicación, que difunden subproductos culturales, concentran los canales de difusión favoreciendo su utilización para intereses particulares y donde los poderes públicos y económicos tienden a apropiarse de los recursos públicos, empleándolos para su propio beneficio.

## **9. La justicia como garante de los derechos de ciudadanía**

El desarrollo pleno del valor de la justicia es un objetivo irrenunciable en el modelo de sociedad que defendemos. La libertad, la igualdad y la solidaridad se asientan sobre este principio.

La justicia tiene una doble dimensión en un Estado de derecho. Desde un enfoque más próximo y directo, es una función del Estado imprescindible para la resolución de situaciones conflictivas y para evitar fugas en el cumplimiento de la legislación o de los compromisos adquiridos; para los ciudadanos, la justicia se convierte así en un valor social de primer orden cuyo funcionamiento incide de manera poderosa en las más diversas situaciones sociales.

Por otra parte, el correcto y equilibrado funcionamiento del poder judicial es un reflejo y una condición para asegurar la “calidad democrática” del Estado. Los grandes males políticos de las sociedades democráticas afectan de manera directa y prioritaria al poder judicial y correlativamente encuentran cauces de solución, en la medida en que jueces y tribunales asuman su papel de aplicación de las normas y valores propios del Estado social de derecho.

Pero el sindicalismo debe incidir además en la defensa judicial de los intereses sociales y laborales. La justicia y el procedimiento laboral deben contar con instrumentos rápidos, eficaces y modernos de protección. La actualización que en otras facetas de la dimensión cívica afecta a la justicia,

singularmente la protección al consumidor, al medio ambiente o a las relaciones mercantiles o civiles, debe extenderse a la justicia laboral.

El ciudadano, en su condición de trabajador o de titular de derechos de protección social, debe percibir que el poder judicial funciona como elemento de equilibrio en su desigual relación con el empresario, con las Administraciones Públicas y con la Seguridad Social.

Finalmente, la justicia como valor, tiene adecuados cauces a través de la autocomposición de conflictos; el papel impulsor de estos mecanismos en el ámbito laboral que el sindicato ha venido realizando debe completarse y desarrollarse, favoreciendo además que instituciones como la mediación y el arbitraje contribuyan a una mayor participación en las relaciones de trabajo y a la búsqueda de soluciones alcanzadas a partir de la negociación y composición de intereses.

## IX. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL EUROPEA

UGT aspira a una Europa unida de carácter social y democrática, que desarrolle un marco político donde se pueda establecer un cuadro completo de derechos cívicos para la consecución de una nueva ciudadanía.

En la Constitución para los ciudadanos europeos se integrará la Carta de Derechos Fundamentales, la protección de los derechos humanos y los derechos sociales. La plena integración europea es un ambicioso paso de progreso hacia un mundo pacífico y democrático. Ahora bien, Europa es más que la Unión Europea, por lo que la ampliación del mapa comunitario a los países del Este constituye la primera exigencia del propio proceso de construcción europea. Sin embargo, dicha aplicación va a hacer más perentoria la necesidad de impulsar definitivamente una mayor dimensión política de la Unión Europea si se quiere dinamizar la dimensión social del Continente.

Este proceso, basado en la consideración de intereses complementarios y no antagónicos, significará también la extensión del modelo social europeo a estos países. Los sindicatos, y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) que unitariamente los agrupa en todo el continente, tienen que ser los agentes más activos para cimentar el pilar social europeo, la defensa del pleno empleo, un alto grado de protección y la solidaridad con terceros países.

La dimensión social es imprescindible en la construcción europea, ya que el modelo social de Europa es un soporte clave y una de las señas de identidad del proyecto comunitario desde su nacimiento. Un gran mercado y una moneda fuerte, sin poder dar trabajo a todos los ciudadanos, no es sólo un fracaso social sino también político para la consolidación de la Unión.

La inserción del empleo, aunque solemnizada en un nuevo Título en el Tratado de la Unión, todavía se limita a proclamar la responsabilidad de los Estados en esta materia y no se traduce en una política común que condicione los objetivos macroeconómicos.

De igual modo, se mantiene desplazada la política social a las acciones que puedan desarrollar los Estados que, por otra parte, han reducido su margen de maniobra en los gastos sociales con las nuevas exigencias de equilibrio presupuestario. El Protocolo Social, incorporado al Tratado, tampoco establece un aceptable cuadro de derechos para perfilar una futura ciudadanía social.

Una Europa de dos velocidades, veloz en lo económico y retardada en lo social, a corto plazo resta entusiasmo para completar el proyecto político y a medio plazo dificultará la consolidación del propio mercado europeo, ya que para su funcionamiento equilibrado se necesita la existencia del doble espacio económico y social. El déficit democrático de la construcción europea aparece de manera nítida en el diseño del Banco Central Europeo, configurado como un organismo autónomo e independiente, lo que desarticula el marco democrático y limita el campo de decisión de la política en aspectos claves de la economía.

Tanto para garantizar el éxito del proyecto europeo como para que la equidad anide en su seno, es imprescindible un marco comunitario de derechos sociales mínimos de carácter vinculante, constitucionalizado en los Tratados de la Unión, con los instrumentos políticos, jurídicos y presupuestarios que lo garanticen, destacando en el ámbito laboral:

- El derecho al trabajo en una ocupación libremente elegida.
- El derecho al reconocimiento europeo de una cualificación acreditada por un Estado miembro.
- La igualdad de oportunidades, sin discriminación alguna y no sólo ante el binomio hombre/mujer sino por cualquier otro motivo, sea de origen étnico, ideológico, religioso o de orientación sexual.
- Una remuneración equitativa y condiciones de trabajo justas, garantizando la dignidad personal, la seguridad laboral y la salud de los trabajadores.
- Una especial protección frente a los embarazos, maternidad/paternidad, discapacidades, enfermedades crónicas o degenerativas, y cualquier otra situación que comporte dificultades para el ejercicio profesional.
- La negociación colectiva europea, la articulación de convenios y el derecho a las acciones colectivas en caso de conflicto.

- El derecho de información, consulta y participación en la empresa en todos sus ámbitos, con la extensión del modelo de las sociedades europeas, la consolidación del papel del Comité de Empresa Europeo y el desarrollo de planos de codecisión.
- El pleno ejercicio de los derechos sindicales y la plena capacidad de actuación de los sindicatos.

Este cuadro de derechos tiene que nacer de una normativa comunitaria, sin perjuicio de la exploración de materias efectuada en el diálogo social con los empresarios europeos. La posterior complementación en el plano laboral debería afrontarse por la vía de la negociación colectiva en el ámbito de la Unión. Las estructuras sindicales europeas de ámbito confederal, sectorial e interregional ofrecen una potente interlocución para abordar la vertebración del proceso, así como la democratización de la vida interna de las empresas a través de los comités respectivos.

En otras esferas del proyecto europeo, y sin perder de vista la plena consecución de los derechos inherentes a la ciudadanía, la CES apuesta, entre otras políticas, por la cohesión económica y social, la elevación del presupuesto comunitario, el establecimiento de una política fiscal basada en la equidad y el desarrollo de servicios públicos.

## X. LA ACCIÓN SINDICAL, COMPROMISO ÉTICO

El Programa Fundamental de UGT pretende enmarcar nuestra conducta ante los desafíos en el mundo, en la sociedad y en el trabajo, abriendo paso a una acción sindical, eficaz y solidaria, desarrollada a todos los niveles. Pero el grueso de nuestra actividad y el comportamiento que lo sustenta, encuentra su foco ordinario en lo próximo, en lo cotidiano.

Los compromisos generales con los grandes retos de la humanidad en buena medida van a seguir siendo, poco más que declarativos. La prueba de verdad estará siempre en lo más específico que directamente atañe a la conducta visible y cotidiana, a través de las acciones puntuales comprometidas en la resolución de problemas concretos, ya sean individuales o colectivos de un centro de trabajo, de una empresa, de un territorio o de un marco social.

El discurso sindical sería puro ruido si no se acompañara de una acción consecuente, una ética del comportamiento, eso sí, asistida por un programa que aporte consistencia a nuestros proyectos de progreso social. Precisamente el trabajo sindical es uno de los más importantes instrumentos de la sociedad para desplegar ese esfuerzo de progreso y cohesión, objetivos consustanciales con los propósitos democráticos.

La acción sindical en la empresa y en otros ámbitos socioeconómicos de nuestro entorno, desarrolla una movilización continua y silenciosa, para equilibrar el afán coincidente de eficacia económica con la necesaria garantía de eficacia social que el Sindicato defiende en cada centro de trabajo, en cada esfera de la vida cotidiana.

UGT tiene que desarrollar una acción sindical comprometida e inteligente, que permita defender la igualdad y al mismo tiempo abra un espacio donde poder ejercitar el derecho a la diferencia en cualquiera de sus manifestaciones, siempre enriquecedoras, ya sean profesionales, culturales, ideológicas, étnicas, religiosas o sexuales.

Por eso, el progreso social que deriva de la acción sindical, tiene rostro humano, no es un mero sumatorio cuantitativo de resultados económicos, sino atención cualitativa y personalizada para la mejora concreta de condiciones de vida y trabajo. Sin sindicatos, la brecha de la marginación estará servida, arruinando la equidad, haciendo imposible la cohesión social.

Pero no sólo la acción sindical adquiere sentido moral en la proyección del Sindicato. La propia afiliación individual comporta, en el nivel que libremente establezca cada ugetista, la participación en un compromiso ético con el progreso solidario de nuestra sociedad. Todo los planos de la vida sindical deben estar atravesados por esta naturaleza del comportamiento.

El sindicalismo conlleva un permanente compromiso ético que afecta tanto a los valores sociales que propugna como a los medios para conseguirlo. Incluso los instrumentos clásicos en la solución de conflictos, cuya expresión máxima es la huelga, tienen que ser siempre democráticos y proporcionados.

En definitiva, con un Programa Fundamental basado en la cultura del trabajo y desde la tradición ética del Sindicato, formulamos nuestro compromiso con un mundo mejor. En la búsqueda de esa convivencia enriquecedora, cabe compartir una reflexión que señalaba “el amor, el trabajo y el conocimiento son las fuentes de nuestra vida; también deberían gobernarla”. Para ello, ayer, hoy y siempre, recordando a los fundadores de UGT, apelamos a la movilización moral de la sociedad y reiteramos el deseo históricamente proclamado de “mujeres y hombres libres, iguales, honrados e inteligentes”.

## **2. La Federación y la defensa de los valores de Unión General de Trabajadores.**

El Programa de la Federación, enraizado en su propia realidad sectorial, se dirige a la acción sindical para mejorar las condiciones de vida y trabajo en el ámbito de los transportes, las comunicaciones y el mar.

Igualmente, nuestro proyecto sindical pretende abrirse a las múltiples respuestas solidarias que exige todo compromiso ético en un mundo injusto y global, contribuyendo a la consecución de una sociedad de rostro humano.

Con este doble propósito, sectorial y global, la Federación defiende y promueve los valores de la solidaridad, la dignidad del trabajo, el pleno empleo, la protección social y la preservación de la naturaleza. Todo ello desde la afirmación de la radical igualdad de la totalidad del género humano y el mayor respeto a la pluralidad étnica, ideológica, religiosa o sexual.

La defensa de estos valores constituyen las señas de identidad del conjunto del Sindicato y se recogen en este Programa Fundamental de UGT que comparte plenamente la Federación.

## **3. Los nuevos retos sectoriales.**

### **3.1. El papel estratégico de los sectores de la Federación.**

Una nueva dinámica mundial, que va mucho más allá de la mera apertura económica, atraviesa la realidad socioeconómica sobre la que opera la Federación. El nuevo escenario acentúa la posición decisiva de nuestros sectores para el crecimiento económico, el progreso social y las pautas de convivencia, definitiva, para la modernización y la cohesión social y territorial.

El papel estratégico de los sectores de nuestra Federación se acrecienta con el proceso de globalización, la construcción europea y el alcance de la nueva economía. En efecto, se está produciendo un acelerado intercambio de bienes y servicios, una explosión del flujo de información y de las comunicaciones, y una progresión de la movilidad sin precedentes.

La pesca es igualmente un sector clave de nuestra economía y decisivo para el equilibrio ecológico. Su futuro estará necesariamente marcado por una limitación de la pesquería (tanto en caladeros propios como en aguas ajenas) que obliga a una reordenación de la actividad basada en la racionalización de la explotación y la preservación de los recursos.

De otra parte, el trabajo autónomo - como realidad transversal en nuestro ámbito - constituye una alternativa de futuro para el desarrollo de los servicios y, gracias a su versatilidad y flexibilidad, permite mantener el empleo en situaciones difíciles y crearlo en coyunturas favorables.

En definitiva, se trata de encuadrar en nuestro propio ámbito los retos sectoriales de un desarrollo sostenible, propiciando las nuevas oportunidades de crecimiento en nuestros sectores que resulten compatibles con los equilibrios ecológicos y sociales:

- El desarrollo de un transporte sostenible en un mapa de equilibrio intermodal en el ámbito europeo.
- El papel estructurante de las comunicaciones en una Sociedad de la Información globalizada.
- La reordenación del sector pesquero para la preservación de los recursos en una reconversión equilibrada.
- La necesidad de establecer para los autónomos su propio marco de regulación y, en particular, un Estatuto del Trabajo Autónomo.

### **3.2. El desarrollo de un transporte sostenible.**

La movilidad se ha más que duplicado en los treinta últimos años (acercándose a la cota de 40 Km

por persona y día en el ámbito europeo), a pesar del efecto sustitutivo de las comunicaciones, gracias al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones y la informática. En todo caso, la demanda de transporte se incrementará por encima de la propia economía, aunque se frenen (con las nuevas pautas de la sociedad de la información) lo que todavía podrían ser mayores crecimientos.

Por eso el nuevo siglo mantiene el reto de una respuesta equilibrada y posibilista al imparable crecimiento de la movilidad, que imprime sus efectos de congestión, polución y deterioro ambiental.

Un modelo de crecimiento que genere empleo y riqueza y se dirija al desarrollo sostenible requiere un sistema eficaz de transportes y sólo cobra sentido con la búsqueda de un nuevo marco de transporte sostenible que, con el desarrollo de infraestructuras, absorben cerca del 10% de PIB. Estos contornos para desplegar toda la potencialidad del mercado interior han sido finalmente entendidos en los foros comunitarios, como bases para futuras actuaciones.

Para atender el crecimiento de la movilidad y paliar los graves problemas colaterales que genera, se abre una nueva etapa en la Política Europea de Transportes, después de una década que puso el acento en la liberalización de los mercados, quizás esperando que ese solo factor irradiase una notable mejora de la eficiencia del sistema y ordenase automáticamente el sector, sin tener en cuenta directamente los derechos que tienen los ciudadanos a una red de transportes de calidad.

En efecto, el Libro Blanco Europeo de 1992, ocupado en la apertura de los mercados y en una liberalización en clave de privatización, no anticipaba medidas que atendieran la desigual modernización tecnológica y empresarial, que, por otra parte, coexistían con el incumplimiento de normas sociales y de seguridad.

Estos fenómenos se acentuaban con una congestión (cuyo coste actual ya supera el 0,5% del PIB) que nublabla toda mejora de calidad y, a su vez, hacía patente la pérdida de cohesión territorial (sobre todo en la periferia económica y geográfica) por las insuficiencias en la red de transportes.

El deterioro se hizo particularmente visible en las áreas periurbanas, lo que obligó a la Comisión a una reflexión sobre la necesidad de una red de ciudadanos y a la exigencia, desde diferentes ámbitos, entre otros, el de la Confederación Europea de Sindicatos, de una auténtica Carta Social de Transportes como espaldarazo a los derechos de los ciudadanos.

En muy distinto sentido, el nuevo Libro Blanco de 2001, aunque recoge esta situación, se plantea un nuevo y ambicioso propósito de relanzar una estrategia global que trascienda a los ajustes de tarificación y medidas de eficiencia empresarial, igualmente necesarias, pero de muy limitado alcance ante la magnitud de los problemas.

Una estrategia de transportes que se sitúa ante una doble escala de actuación europea y mundial. Así, en nuestro ámbito, se dan cita la europeización de las redes de infraestructura y los transportes terrestres y la mundialización en los transportes aéreo y marítimo. Una focalización especial requieren los transportes urbanos, donde las soluciones son más complejas y las alternativas e inversiones trascienden a las propias áreas metropolitanas de referencia. Además, la nueva orientación también debe incidir en otros campos como la ordenación del territorio y el urbanismo, los hábitos sociales y la labor educativa, así como en la investigación que sirva de base para los transportes del futuro.

Las 60 medidas que recoge el Libro Blanco seguramente marcarán las actuaciones de transportes en la presente década y darán un potente contenido a la Política Común de Transportes, nacida con el Tratado de Roma y reforzada con el Tratado de Maastricht, pero que hasta la fecha era más declarativa que resolutive. Su enfoque global persigue la integración, la homogeneización y el desarrollo del transporte para una movilidad sostenible dentro de un espacio común. La ampliación de la Unión Europea todavía exige más una incisiva resolución práctica que vertebré todos los territorios, especialmente las regiones periféricas.

El propósito más ambicioso será **reequilibrar el reparto modal** que obliga a la Unión a actuaciones drásticas, en consonancia con los objetivos ambientales propios del transporte sostenible, con medidas tendentes a:

- **Reforzar la calidad del transporte por carretera**, garantizando la seguridad vial e impulsando la armonización social y fiscal. También debiera apoyarse una nueva tarificación que elimine la tentación de dumping (eludiendo las normas sociales y de seguridad) con precios a la baja, fruto de la presión derivada de la atomización empresarial.
- **Revitalizar el ferrocarril**, para cuya modernización se proyectan grandes infraestructuras y se facilita la interoperabilidad en el espacio europeo. Las realizaciones más conocidas en viajeros (cercanías y alta velocidad) no pueden desdeñar la necesidad de potentes y eficientes servicios de mercancías.
- **Controlar el crecimiento del transporte aéreo**, compatible con la calidad del servicio, para reconciliarlo con el medio ambiente y recuperar la confianza de los pasajeros en la seguridad del sistema. Todo ello teniendo presente que opera en un mercado global y competitivo.
- **Adaptar el transporte marítimo** (y fluvial en otros países europeos) a las nuevas exigencias técnicas y sociales, fomentando su uso con corredores que pudieran considerarse autopistas del mar, sin olvidar los efectos de la mundialización que directamente afectan a todos los operadores marítimos.
- **Reforzar la calidad de los servicios en los puertos**, con la regulación del acceso al mercado de los servicios portuarios, la consideración de los puertos en la red transeuropea de transportes y la supervisión sobre la financiación de los puertos y sus infraestructuras.
- Vincular los distintos modos de transporte, materializando **la intermodalidad** como expresión de calidad y eficiente asignación de medios al servicio de los usuarios, especialmente en las áreas metropolitanas y para los tráficos recurrentes.

Una condición de este cuadro de medidas, apenas apuntado, será la realización de **grandes redes transeuropeas**, haciendo realidad **los planes de infraestructura** (particularmente en el sector ferroviario) y resolviendo los estrangulamientos de capacidad, ya que la supresión de los puntos de congestión (cuyo coste puede suponer el 1% del PIB en el año 2010) son una buena inversión de futuro.

Pero todas estas medidas perderán sentido si no se dirigen a una política de transportes al servicio de los usuarios, cuyos derechos correlativamente deben incentivar el desarrollo de la calidad de las prestaciones y la garantía de las obligaciones de servicio público.

Con este enfoque, la más urgente actuación debiera encaminarse a **una mejora sustancial del transporte urbano**, cuya racionalización pasa por una voluntaria renuncia del vehículo privado a favor del atractivo que puedan ofrecer los transportes públicos. Para afrontar este reto, habría que acentuar el carácter público del transporte por la naturaleza de la prestación (calidad, obligación de servicio público y valor social) y no por la propiedad pública del prestador.

En este punto, la propia **organización del transporte urbano** resulta determinante para armonizar servicios en beneficio de los ciudadanos, de tal modo que puedan garantizar:

- La integración de diferentes operadores públicos y privados sujetos a un adecuado régimen concesional.
- La materialización de la intermodalidad con una apropiada infraestructura de intercambiadores.
- La unificación tarifaria con abonos de transporte en áreas homogéneas, que permita el libre uso por los viajeros.

Ya existen significativos esfuerzos, como el Consorcio de Transportes de Madrid, que pueden servir para nuevos proyectos en otras áreas metropolitanas.

### **3.3. Las comunicaciones en la Sociedad de la Información.**

Las telecomunicaciones, que unen terminales con servidores, constituyen las redes imprescindibles para desplegar la Sociedad de la Información, entendida ésta como un estadio del desarrollo social que permite obtener y compartir cualquier información, instantáneamente y desde cualquier lugar, es decir, con plena globalización.

El acceso a la información en términos de voz, datos y contenidos que la Sociedad de la Información proporciona tiene el mismo valor estructurante que tuvieron en su día los bienes en la sociedad industrial o los servicios en la postindustrial; un resultado de la convergencia de los nuevos servicios, con el más elevado soporte tecnológico en un mercado liberalizado y globalizado.

La infraestructura y los servicios de comunicaciones son soportes imprescindibles de la Nueva Economía, sectores con una auténtica explosión expansiva que arrastra una velocidad de crecimiento de las telecomunicaciones triple a la del resto de la economía.

Todas estas características no sólo definen al sector de las comunicaciones como parte de la “nueva frontera” del desarrollo económico y social, sino que, a la vez, internamente han generado una profunda transformación de su estructura y naturaleza.

En la década anterior los cambios estructurales supusieron la liberalización del sector, la privatización de las empresas prestadoras y la irrupción de nuevos operadores sin que se completara una armonización de la competencia ni una adecuada regulación del mercado. En ello ha influido el débil papel de los órganos reguladores, especialmente visible en la falta de tutela hacia los derechos de los ciudadanos.

España se ha convertido en el quinto mercado europeo en servicios de comunicaciones, sumando la telefonía fija, la móvil y la transmisión de datos.

La punta más significativa ha sido la penetración del móvil (equivalente a la media europea) gracias al éxito de la segunda generación (tecnología conocida por las siglas GSM) que en el año 2001 atendía a 26 millones de terminales y disponía de servicios interactivos a través del protocolo WAP para un millón de usuarios. Pero el acceso a internet desde el móvil se desplegará complementariamente con la tecnología GPRS (conocida como generación intermedia entre la segunda y la tercera) y sobre todo con la UMTS (tercera generación).

La telefonía fija, con cerca de 20 millones de líneas, se aproximaría a la saturación si no fuera por la aparición de la potencialidad que puede ofrecer para los servicios de internet la banda ancha con el par de cobre de la línea de telefonía básica.

En el año 2005 (al final del mandato congresual), España puede disponer de tantas líneas de móviles adecuadas para el acceso a internet como habitantes, y en la telefonía fija la actividad vinculada al acceso a datos y contenidos desplazará definitivamente a la tradicional comunicación de voz.

Una revolución en el sector que directamente afecta a las pautas de vida de los ciudadanos, sin que sus derechos como usuarios tengan una auténtica carta de naturaleza. Por una parte resultan patentes los riesgos de una desigual distribución de infraestructuras, sobre todo entre el medio rural y urbano. Por otra parte, los usuarios carecen de garantías para el acceso a servicios esenciales en condiciones asequibles o para una fácil resolución de reclamaciones.

Por todo ello, si el papel de los órganos reguladores en la organización del mercado ha sido insuficiente, todavía resalta más la ausencia de tutela de la Administración en los incipientes derechos de los ciudadanos en la Sociedad de la Información, ni siquiera en el servicio telefónico universal.

El sector de las telecomunicaciones, en definitiva, es el sector clave para la Nueva Economía, que se encuentra en una permanente revolución y que impacta directamente en el resto de los sectores. En él convergen los nuevos desarrollos de los sistemas multimedia, financieros y comerciales y en su dinámica cuenta con un cambio tecnológico incesante que multiplica velocidades de transmisión, capacidades de gestión y codificación y grados de accesibilidad hasta extremos nunca vistos.

Dicho sector, a pesar de los cambios que se han producido por las cargas financieras adquiridas en relación con las licencias UMTS y la caída de márgenes asociada a la disputa de unos mercados crecientemente abiertos, sigue asistiendo a un cambio radical en el futuro de las redes y los servicios. Y es que las redes han dejado de ser únicas, unipropósito y aisladas. Por lo que las redes y los servicios deben ser reconfigurables dinámicamente en busca de la adaptabilidad a la demanda multidiversa.

Para atender tal demanda es imprescindible acrecentar la integración de servicios, al tiempo que es obligado multiplicar la inteligencia de las redes para que los servicios sean integrados y multimedia, con creciente personalización lo que hace que no se diseñen pensando en su universalidad, ni pueden quedar ligados a geografías y redes concretas, ya que serán ofrecidas a través de la interconexión de varias, por lo que los agentes interesados dejan de tener objetivos comunes, como ocurría en la provisión integrada de servicios telefónicos que justificó el nacimiento de las “telefónicas y PTT’s” y que hacían coincidir los objetivos de innovación, fabricación y servicios

Así, las telecos tradicionales quieren afianzar ventaja en redes para ensanchar la diferenciación competitiva y preservar la continuidad, y les suelen seguir en tal empeño fabricantes de equipos y proveedores de servicios. Mientras, la Administración y los Gobiernos piensan más en la competitividad de los tejidos económicos que en la cohesión de los usuarios y empiezan a estar muy preocupados por si los procesos de desregulación, venta de licencias y competencia sin límites no estará deteriorando en demasía un sector esencial para la competitividad. Por último la interoperabilidad ineludible obliga a la transparencia legislativa, en costes, y a abrir mercados, lo que en definitiva cuestiona la viabilidad del servicio universal y los comienzos de las teleaplicaciones públicas.

A la vista de las tendencias esbozadas más arriba, las telecomunicaciones están abocadas a unas nuevas demandas de inversión que permitan concretar las principales tendencias tecnológicas y que obligarán a cambiar aún más los modos de hacer de los operadores clásicos.

En lo referente a las nuevas demandas de inversión cabe apuntar que los operadores tradicionales han realizado en años precedentes fuertes inversiones, tanto en las infraestructuras y equipamientos básicos como en la modernización (digitalización) de troncales y nodos. Y más recientemente se han endeudado intentando desarrollar tanto sus negocios de móviles como el sector.com, por lo que la inversión ha caído, aunque se siga orientando a los equipamientos para acrecentar la eficiencia y la calidad de la red (mantenimiento) y la productividad de los recursos (automatización), a los equipamientos que faciliten la diversificación y expansión de los servicios, y a facilitar éstos a los clientes singulares que son los otros agentes (interconexión), mientras que ha desaparecido la preocupación por la expansión internacional.

Todo ello facilitará el que sea posible concretar las principales tendencias tecnológicas que se perciben, a sabiendas de que las claves tecnológicas dominantes siguen estando lideradas por tres tecnologías esenciales:

Todo ello tiene consecuencias en los avances en las técnicas que transforman las redes en redes multipropósito y en el desarrollo vertical de la inteligencia de las redes y su incidencia en la provisión de nuevos servicios, lo que a la postre multiplica la efectividad de las tecnologías auxiliares (tratamiento digital de señales, realidad virtual, inteligencia artificial, etc.). Y hace que se aproveche al máximo el que los servicios al ser efímeros llevan a una dinamización de

portfolios y a la evolución continuada de los precios, acrecentando las incertidumbres derivadas de la integración, portabilidad, interoperabilidad. y de no saber cuáles serán las *killers applications*.

Por ello hay que combinar capacidades, velocidad, interactividad, con contenidos y valores añadidos, y hacer frente a proveedores de servicios y contenidos que no tienen propiedad sobre las redes, por lo que la amortización de sus inversiones puede llevar ritmos muy rápidos.

De ahí que las perspectivas de las telecomunicaciones integrales exijan la reestructuración permanente para la gestión de clientes y la defensa ante los nuevos entrantes, que no aspiran a permanecer pero que se aprovechan de la convergencia canales-contenidos y revisión cadenas de valor. Para defender las posiciones en el mercado es necesaria la búsqueda de complementariedades que aseguren innovación y márgenes con el fin de rentabilizar activos existentes.

Todo ello está facilitando la continua renovación de ofertas mediante la innovación permanente de aplicaciones y soluciones, que se consigue gracias al concurso de unidades empresariales especializadas en los distintos subprocesos, y que ofrecen sus soluciones a precios cada vez más bajos amparándose en unos costes de producción (incluidos los laborales) cada vez más ajustados y que se mueven dentro de los márgenes admisibles para cada especialidad.

Por lo que se está:

- a) ante un mercado de ofertas que se expanden y diversifican,
- b) con unas condiciones laborales heterogéneas y
- c) con unos empleos efímeros que se ajustan a la vida operativa y rentable de cada aplicativo,
- d) sin que ello limite las exigencias de formación y cualificación de los trabajadores involucrados,
- e) pero que sí limita la negociación de unos mínimos en las condiciones laborales, dada la dinámica del mercado y que conduce a una difícil integración de los activos personales en la marcha de los negocios.

Tal falta de integración está incidiendo negativamente en los procesos:

- a) de calidad total imprescindibles,
- b) de innovación,
- c) y en la gestión del conocimiento, que se ve como elemento decisivo para detectar oportunidades y aplicar habilidades profesionales adecuadas

Por estas razones las operadoras más eficientes están apuntando su competitividad no en los costes laborales reducidos y sí en la empleabilidad operativa de sus recursos humanos lo que conduce a una preocupación creciente por la formación y por retener a los más cualificados (empleables) para limitar su migración a la competencia

Las nuevas líneas del diálogo social deben abordar

- a) la fragmentación, propiciando el desarrollo de estándares mínimos,
- b) la reducción de empleos estables y la multiplicación de otros de carácter efímero que pueden fomentar la precariedad,
- c) el desarrollo de carreras profesionales, que no asocien empleo a tecnologías ni procedimientos específicos, sino que lo vinculen a sistemas formativos que propicien la migración de actividades
- d) la defensa de unos derechos laborales homogéneos tanto para fijos, como externalizados y temporales.

El sector se enfrenta, por tanto, a cambios decisivos en los mercados y a unos cambios

imprescindibles en la gestión de los recursos humanos y de sus cualificaciones. Y es que entre los primeros cabe apuntar:

- un rápido crecimiento del mercado (9%),
- un no menor crecimiento de agentes,
- una caída espectacular de los precios internacionales,
- y una pérdida de cuota de mercado de los operadores dominantes (del 96% al 91%)

La convergencia digital, por otro lado, ha difuminado los límites y fronteras en servicios, tipos de red y terminales. Al tiempo que la Nueva Economía aprovecha las potencialidades de la red y de las interconectividades.

En este contexto, la acción sindical tiene que enfrentarse:

- al cambio de negociar con un sector público para hacerlo con un sector privatizado,
- a una gestión empresarial más agresiva
- a la caída del empleo en un 30%
- y a la aparición de nuevos operadores

Por tanto, la transformación de una acción sindical de empresa en una de sector.

Para hacerlo se ha trabajado en adquirir compromisos asociados a la gestión del conocimiento, la formación continua y el desarrollo de carreras profesionales. En tal sentido, desde marzo del 2000 los objetivos se orientan a conseguir:

- la organización de la formación,
- la certificación,
- el uso de Internet,
- y la modernización de la organización del trabajo,

de forma que se logre cómo reconciliar la seguridad de los trabajadores con la flexibilidad que requieren los operadores.

### **3.4. La reordenación del sector pesquero.**

La pesca está indisolublemente unida a un delicado equilibrio entre una aconsejable estrategia de diversificación alimentaria y una política medioambiental más respetuosa que la practicada hasta la fecha. Todo ello es particularmente importante en nuestro país, con unos arraigados hábitos de alimentación vinculados a la pesca que al ir unidas a la mayor flota pesquera europea choca frente a una limitada capacidad de los caladeros propios.

Esta tradicional desigualdad entre dimensión de la flota y potencialidad de los recursos había sido resuelta con una activa búsqueda de nuevos caladeros fuera de nuestras aguas, bien por ser éstas internacionales o por acuerdos sobre caladeros ajenos con los respectivos países, intercambiando cuotas de pesca por cuotas de mercado.

Sin embargo, el futuro sectorial se aleja de esta vieja estrategia nacional que, en todo caso, ha cambiado de escala para integrarse en un marco europeo donde se diseñan nuevas estrategias. Los recursos pesqueros se han nacionalizado (con las 200 millas de Zonas Económicas de Exclusión), los socorridos intercambios de cuota han perdido virtualidad con la liberalización de los mercados y los equilibrios ecológicos han pasado a un primer plano.

Por tanto, el nuevo mapa extractivo, que disminuye los caladeros y limita las capturas, obliga a una reordenación sectorial con reducción de capacidad de flota (desde los desguaces de buques a los amarres periódicos) que debe ir acompañada de una intensa acción protectora a los pescadores en el proceso de reconversión.

La pesca de bajura ha perdido peso y, en todo caso su regulación (hoy competencia de las Comunidades Autónomas), es necesariamente restrictiva por el agotamiento de los recursos en las aguas litorales.

El resto de la actividad, regulada por la Comisión Europea, se gestiona en el marco de la Política Pesquera Común, que se dirige a garantizar la conservación de los recursos, el acceso a todos los caladeros europeos y la protección de los intereses de las comunidades costeras.

Estas pautas no eximen la responsabilidad de las diferentes Administraciones a la hora de racionalizar las explotaciones, modernizar la flota, establecer las paradas biológicas y vincular a la industria transformadora. Muy al contrario, las dificultades del sector requieren un mayor esfuerzo en investigación de recursos (en la regeneración, las especies y los nuevos caladeros), canalización de ayudas y atención a los profesionales del sector (frente a las duras condiciones de trabajo, la siniestralidad laboral y la baja acción protectora) para responder al reto de modernización emprendido.

### **3.5. Los autónomos.**

Los profesionales autónomos de nuestro ámbito constituyen una potente realidad transversal que abarca a más de la cuarta parte del conjunto de los trabajadores. A la importancia cuantitativa de los autónomos se une su imprescindible función estructural, dando soporte productivo a la práctica totalidad del transporte por carretera y del mundo del taxi; así mismo, su papel resulta decisivo para explicar ciertas actividades en la pesca, el turismo y las telecomunicaciones.

El nuevo mapa del mundo del trabajo dibuja un retroceso de las grandes concentraciones de asalariados, una mayor individualización de la relación laboral, y la irrupción de un creciente campo para el trabajo autónomo, vinculado al desarrollo de las iniciativas más flexibles en el ámbito de los servicios y en el ejercicio de nuevas profesiones

Estos nuevos fenómenos que caracterizan la pujante presencia de los autónomos se acentúan especialmente en nuestro sector, donde se dan cita la viveza de las tradicionales profesiones de camioneros, taxistas, pescadores o marisqueros con las más novedosas como operadores de alquiler de coches, los guías turísticos o los técnicos de comunicaciones.

La extensión del proceso de salarización de los trabajadores, como expresión del trabajo dependiente, en tanto que única fórmula de garantizar la integración productiva, tiene unos límites y su techo se hace más patente con las nuevas formas de concebir la producción en la sociedad de futuro. La nueva realidad del trabajo hace posible establecer formas complejas de articulación productiva, sin integrarse en una sola empresa, modelos que podrían estar basados en la colaboración desde la propia identidad del autónomo.

Además, en determinadas ramas de actividad (como en el transporte por carretera) una amplia dimensión de la empresa no resulta clave y, sin embargo, una buena autoorganización es imprescindible para atender satisfactoriamente la demanda. En estos casos, el “efecto de escala” (mayor tamaño) no optimiza la eficiencia empresarial y, por eso, el trabajo autónomo puede ser una adecuada respuesta productiva en sus respectivos mercados.

Ahora bien, la plena realización del potencial de competitividad económica de los autónomos requiere un cambio de rumbo en el marco regulatorio y unas apropiadas bases institucionales sobre las que puedan operar estos profesionales. Sin embargo, hasta la fecha, en muchas ocasiones, las políticas activas de ordenación por parte de la Administración se asientan en los intereses de las grandes empresas (es el caso del Plan Estratégico de Transporte por Carretera, PETRA), a veces desvirtúan el propio régimen concesional (caso del taxi) y, en general, no tienen en cuenta la adecuada dotación de equipamientos y mecanismos (centros de carga, financiación, compras) que incentiven el trabajo asociado y el cooperativismo.

El propio marco social para estos profesionales desincentiva su establecimiento como trabajadores autónomos por múltiples razones: la ausencia de coberturas institucionales, falta de apoyo

financiero, laxa regulación de tiempo de actividad y descanso, una prolija exigencia administrativa, una excesiva fiscalidad y, sobre todo, una insuficiente protección social.

Todo ello lleva a plantear la necesidad de establecer su propio marco de regulación y, en particular, un Estatuto del Trabajo Autónomo que, con perspectiva de futuro, regule adecuadamente su régimen de actuación. Al mismo tiempo, esa clarificación normativa permitiría deslindar y sanear la situación de los falsos autónomos, aquellos que, siendo verdaderamente trabajadores dependientes, no se les reconoce su relación laboral.

Las expectativas del trabajo autónomo reclaman un adecuado marco de apoyo que facilite el despliegue de toda su potencialidad. Los impulsos de asistencias, formación y servicios para los autónomos, reforzarán su papel económico y facilitarán su plena modernización profesional. Una nueva vertebración que permitirá organizar la producción de modo flexible, con precios competitivos, incorporando garantías de calidad en las prestaciones.

El trabajo autónomo, como realidad transversal en nuestro ámbito, constituye una alternativa de futuro para el desarrollo de los servicios y, gracias a su versatilidad y flexibilidad, permite mantener el empleo en situaciones difíciles y crearlo en coyunturas favorables.

Su valor social es incuestionable y no se encuentra en un proceso a la defensiva frente a una deseable o irreparable salarización. La personalización y la colaboración serán las premisas para poder profundizar positivamente en el trabajo asociado, los proyectos corporativos y otras formulaciones innovadoras.

En definitiva, el sentido de futuro de los profesionales autónomos engarza con la creciente importancia del papel de los emprendedores en una nueva dinámica social.